

Redes de movilidad, migración y nuevos espacios de reproducción social*

En el transcurso de las últimas décadas, las comunidades indígenas del estado de Guerrero han desplegado una intensa movilidad individual, familiar y comunitaria para establecer condiciones que aseguren su reproducción social. En un contexto de estrategias múltiples e interrelacionadas, sortear distancias, fronteras y nuevas espacialidades ha sido una de sus principales herramientas para afrontar, en primer término, una persistente polarización económica y social que en la entidad compromete la sustentabilidad de sus comunidades de origen y coloca a sus habitantes en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria.

Aún cuando el vínculo con la tierra sigue siendo fundamental para quienes permanecen anclados a los territorios indígenas y la vida comunitaria rural se organiza en torno a este eje productivo (De Teresa, 1996: 212), las sociedades rurales están viviendo un proceso de desagrarización. El 55% del total de los ingresos de las familias campesinas provienen ya de trabajo no agrícola (de Janvry y Sadoulet, 2004:110), por lo que hay una brecha creciente entre el tamaño de la población que vive en el campo mexicano y la población que vive del campo mexicano (Fox, 2005: 36).

La decreciente participación económica del trabajo agrícola en los hogares rurales ha dado lugar a nuevas y complejas formas de estructurar la ruralidad. Entre ellas, la reproducción social se ha tenido que vincular necesariamente a los mercados de trabajo flexibles y a los flujos de capital nacional e internacional. Como resultado de ello, el grupo doméstico desbordó los límites de la residencia común, para que tanto los miembros residentes como los no residentes participasen mancomunadamente en un haz de obligaciones mutuas destinadas a contribuir a la supervivencia, promoción y movilidad social de sus

miembros (Ribas, 2004: 84). Esta estrategia se enmarcó también en un complejo de vínculos fluidos que articula las redes familiares con las del parentesco, las comunitarias y las étnicas, redes con las cuales se comparten obligaciones de ayuda mutua e identidad.

En este esquema, el hogar campesino como unidad de producción familiar apostó a la diversificación y polivalencia productiva de sus integrantes, de manera que las principales fuentes de efectivo para solventar los gastos domésticos normales, para saldar deudas o adquirir otros bienes y servicios necesarios se obtuviesen mediante la pequeña producción mercantil (artesanías), la venta de la fuerza de trabajo en los mercados locales, regionales o nacionales, los envíos de transferencias de los integrantes de la familia que emigran y mediante los bonos económicos que se reciben de los programas gubernamentales de combate a la pobreza —Oportunidades— y de apoyo directo a los productores —Procampo— (Nadal, 1999: 145; Salcedo, 1999: 72; C. de Grammont, 2004: 287; 2006: 32).

En la economía local, la principal opción abierta fue mantener la producción agropecuaria de subsistencia en combinación con la utilización de otras fuentes de ingreso agrícolas (jornaleros en pequeñas propiedades o ejidos de la región) y no agrícolas, como los pequeños comercios, la actividad fabril a domicilio y la producción artesanal (Nadal, 1999: 74; Canabal, 2000: 170; C. de Grammont, 2006: 22).

Fuera de sus localidades, los indígenas han conjugado diferentes procesos de movilidad tanto nacional como internacional. Una característica de esta movilidad fue que, para ampliar sus oportunidades de empleo, como mano de obra no calificada en mercados altamente competitivos, los indígenas incorporaron a la oferta de su fuerza de trabajo su disponibilidad para integrarse productivamente en redes de movilidad, que en sus condiciones de intercambio

* Lilián González Chévez, Profesora-Investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

articulan la subordinación, la disponibilidad y la movilidad como parte de sus elementos constitutivos (De Gaudemar, 1987: 113).

Si en la segunda mitad del siglo xx los indígenas se insertaron en dos grandes redes de movilidad no excluyentes entre sí: la que conforman como jornaleros agrícolas migrantes y la que les articula a la migración internacional indocumentada, en los albores del siglo xxi son perceptibles, tanto los procesos de asentamiento y/o consolidación de nuevos espacios de reproducción social para unos, como el mantenimiento constante de esa movilidad para otros, convirtiéndose esta última en un estado y forma de vida (Canales y Zolniski, 2000: 633).

Las fuerzas estructurales que promueven la movilidad indígena

Inseguridad alimentaria y estrés nutricional

Sin pretender sacrificar la complejidad de las causas que originan la movilidad en las comunidades indígenas del estado de Guerrero, no se puede obviar que un factor determinante en el impulso de los flujos migratorios es la falta de insumos suficientes para cubrir las necesidades mínimas de alimentación del grupo doméstico en forma permanente o temporal, sea por la vía de la producción para el autoconsumo, la compra de alimentos e incluso, a través de estrategias ancestrales como el trueque, la recolección de vegetales, la caza de animales silvestres o la obtención de alimentos a cambio de trabajo. Para satisfacer esta necesidad vital, señala Nemeccio (2006: 9), se ha de salir del estado y aún del país.

La insuficiencia alimentaria tiene como común denominador las desfavorables condiciones de intercambio hombre-naturaleza en las que se desarrolla la actividad tradicional indígena, así como las asimetrías en las relaciones de producción local, regional, nacional o supranacional cuando la actividad productiva indígena se inserta en la economía de mercado. En ambos casos, la cantidad de energía que se invierte en la subsistencia no parece compensarse con la cantidad de energía que se obtiene para la subsistencia; de ahí que el balance energético sea negativo y se manifieste en estrés nutricional. Estas relaciones de intercambio desigual, reproducidas en el tiempo y a través de generaciones, son el resultado de los efectos excluyentes o discriminatorios en que fueron vulnerados, durante siglos, los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas

(Kompass, 2003: 153) y cuyas secuelas hoy se condensan en pobreza e inseguridad alimentaria.

En Guerrero, del 70 al 80% de la población no cubre sus necesidades mínimas de alimentación (Torres, 2002: 19). No obstante, es significativo que entre las zonas y grupos particularmente expuestos en la geografía del hambre en la entidad, se encuentren precisamente los territorios con mayor concentración de habitantes indígenas: la región de La Montaña, la Zona Norte (cuenca del Alto Balsas) y la parte alta de la Costa Chica (región amuzga), donde el índice de riesgo nutricional es extremo o muy alto en casi la totalidad de sus municipios (Roldan *et al.*, 2003 anexos 3 y 4; Torres, 2002: 21).

El déficit nutricional en los municipios con mayor proporción de hablantes indígenas es correlativo a su consumo de alimentos; así, el hecho de que el 41.1% de la población indígena de Guerrero perciba menos de un salario mínimo por su trabajo o de plano no reciba ingresos (INEGI, 2004a: 74), traspasa la línea de “pobreza alimentaria” (no obtienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos) para ubicarles de lleno en el umbral de “inseguridad alimentaria”, donde se incluyen aquellos hogares que aun dedicando todo su ingreso al consumo de alimentos, no podrían satisfacer sus necesidades mínimas en este rubro y, por lo tanto, caen en condiciones de subconsumo permanente (Torres, 2001: 18; Torres, 2002: 21).

De acuerdo con Torres (2001: 9; 2002: 17), la seguridad alimentaria es un asunto de accesibilidad, por lo que sus verdaderas dimensiones se ubican en la capacidad interna de consumo otorgada por la capacidad adquisitiva de las familias y sus ingresos. Así, reitera Kompass (2003: 107), es la desigualdad en los niveles de ingreso de la población y la caída de los salarios reales lo que determina la existencia de marcadas diferencias en el acceso a alimentos, tanto en cantidad como en calidad.

Pobreza, marginación y escasas oportunidades de desarrollo humano

En Guerrero, el ingreso per cápita estatal es prácticamente la mitad (54%) del ingreso promedio nacional, situación que comparte con otros dos estados del sur del país: Oaxaca y Chiapas (Carrasco *et al.*, 2001: 1). Si tomamos en cuenta indicadores sociales como el índice de marginación, encontramos que Guerrero es la entidad federativa con mayor marginación del país (Conapo, 2006: 17), sin embargo, el impacto global de las carencias se concentra mayoritariamente en las lo-

calidades con mayor presencia indígena, de manera que el 82.4% de la población hablante de lengua indígena vive en comunidades que presentan muy alta marginación (Conapo, 2004a: 41, anexo A), particularmente la región de La Montaña, cuya población presenta los mayores índices de marginación del estado y aun del país.

Respecto a las oportunidades de desarrollo humano —registrado a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH)— (López, 2005: 37), la entidad ocupa el lugar número treinta en el país, sólo por encima de los estados de Chiapas y Oaxaca, y aun cuando en promedio se ubica en el mismo rango de desarrollo que las demás entidades del país con un nivel de desarrollo humano medio; si se desagrega la información por municipios, se hacen patentes los marcados contrastes al interior de la entidad y la relación inversa entre población indígena y desarrollo humano (Conapo, 2004a). Expresión de ello es que entre los cincuenta municipios con mayor rezago en desarrollo humano de todo el país, precisamente nueve son municipios indígenas de la región de La Montaña: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlixac, Copanatoyac, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlacoachistlahuaca, Xalpatláhuac y Xochistlahuaca; en particular, el municipio de Metlatónoc registra el IDH más bajo del país (López, 2005: 54; CDI, 2005: 32).

En estos municipios, la falta de oportunidades para el desarrollo se manifiesta en la escasa posibilidad de tener una vida larga y saludable, un avance educativo y opciones de ingreso (CDI, 2005: 5), ampliándose la brecha por la falta de seguridad pública y de acceso a la justicia y además por la pérdida en desarrollo atribuible a la desigualdad por género, situación en que Guerrero ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional (López, 2005: 32).

Ponderando diversos indicadores sociales y demográficos, algunos analistas explican la diferencia de ingreso en el estado de Guerrero respecto del resto del país por el impacto de cuatro parámetros básicos: las insuficiencias en la calidad del empleo, los bajos niveles de instrucción del jefe de familia, las disparidades atribuibles al hecho de vivir en una comunidad rural y el hecho de tener un mayor número de dependientes por familia (Wodon *et al.*, 2003: 2). Entre los hablantes de lengua indígena, esta brecha es significativamente mayor que para el promedio de la entidad y pone en evidencia su mayor pobreza y vulnerabilidad social. En Guerrero, el 75.6% de la población indígena vive en comunidades rurales (INEGI, 2005a: 312) donde se concentran demarcaciones territoriales con bajos índices de ingresos y menor oferta de oportunidades.

En las comunidades rurales, el 76.9% de los hombres y 47.8% de las mujeres indígenas se dedican a actividades agropecuarias (Fernández *et al.*, 2006: 16; INEGI, 2005a: 337). Se ha demostrado que hay una gran disparidad de bienestar económico entre la población dependiente del agro y la no dependiente. En el sector primario no hay una estructura productiva sólida que garantice fuentes de ingreso estables para la población, de manera que, aun cuando en las zonas indígenas el índice de ocupación es más elevado que en el promedio de la entidad, la calidad del empleo es precaria, 64.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja por su cuenta o trabaja sin pago en el predio familiar y los ingresos que se obtienen del mismo son insuficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias (INEGI, 2004a: 73). El hecho de que la mayor parte de la población indígena dependa en mayor medida del sector de actividad con menor rentabilidad, como es el sector agrícola, impacta directamente sus niveles de ingreso.

Sumado a ello, los indígenas en Guerrero perciben la tercera parte (34%) del ingreso promedio nacional (Carrasco *et al.*, 2002: 1); además, el rezago educativo alcanza al 86.9% de la población mayor de 15 años (INEGI, 2005a: 332) y el promedio de hijos por mujer en los hogares indígenas es de 3.34, mientras que la tasa nacional es de tres (INEGI 2004a: 28), lo que contribuye a que la población indígena de Guerrero cuente con el índice más alto a nivel nacional de dependientes económicos por familia (Fernández *et al.*, 2006: 102).

Otro de los grandes ejes de desigualdad en Guerrero es el originado por la pertenencia étnica. La desigualdad interétnica de Guerrero es la tercera más importante del país y se refleja por ejemplo, en el hecho de que haya una diferencia de 36.8% entre el analfabetismo indígena y el no indígena en la entidad (Fernández *et al.*, 2006: 82 y 97). Esta brecha educativa repercute en que los indígenas tengan una desventaja mayor en materia de generación de ingresos, ya que no pueden acceder a los empleos no agrícolas mejor remunerados (de Janvry y Sadoulet, 2004: 116).

Estas condicionantes, en conjunto, determinan que tres de cada cuatro indígenas vivan en situación de extrema pobreza (Hall y Humphrey, 2003: 1) y favorecen el lento pero progresivo decremento de la población indígena rural en la entidad, que disminuyó de 79.9% en 1990 a 75.6% en 2000 (INEGI, 2005a: 312).

Por otra parte, las insuficiencias productivas en la entidad son generales y se manifiestan en la escasa aportación histórica de la economía guerrerense al

Producto Interno Bruto (PIB) del país. Un análisis por sectores de la economía muestra que el sector terciario destaca por su contribución al Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) con una participación del 79.4% del producto total estatal; el sector secundario contribuye con el 14.8% y el sector primario solamente con el 5.8% (INEGI, 2006c), con lo que se consolida una tendencia hacia la terciarización de la economía, el estancamiento en la productividad industrial y la contracción progresiva del sector primario (Sarabia, 2001: 193).

Economías indígenas deficitarias

Tradicionalmente, las economías indígenas articulan la producción de una agricultura de subsistencia con un segmento de economía de mercado (Perafán, 2000: 3). Como productores, los indígenas tienen extensiones limitadas de tierra —no mayores a tres hectáreas—, en unidades de producción que no cuentan con sistemas de irrigación (95%) y en suelos deficientes cuya preparación se realiza con insumos de producción e instrumentos de labranza mínimos; así, el 90% de la actividad agrícola se realiza mediante tracción animal o con labranza cero, con ínfima utilización de semillas mejoradas (6%) y pesticidas (20%), con regular utilización de fertilizantes químicos (50%) y con mínima asistencia técnica (7%) (Nadal, 1999: 105; Sagarpa, 2005 y 2006). Sumado a ello, más del 95% de la superficie agrícola de las unidades de producción indígenas es de temporal y se reserva a la producción de maíz destinada al autoconsumo (Sagarpa, 2005 y 2006).

Fundamento de la alimentación y de la cultura indígena, la producción maicera en las regiones y/o municipios indígenas presenta, sin embargo, los mayores índices deficitarios. Una de las áreas con mayor crisis agrícola es la región de La Montaña. Asiento del 65% de la población indígena de la entidad, su déficit en la producción de maíz afecta al 76.4% de sus municipios y, en la región Norte, el 50% de los municipios reportan también crisis en la producción de maíz (Matías, 1994: 40; Sagarpa, 2006: 3 y 9).

Aun cuando el volumen de producción es insuficiente para cubrir los requerimientos alimentarios de la unidad doméstica, por razones históricas y culturales irreductibles a los actuales cálculos económicos, los campesinos se resisten a dismantlar del todo su endeble autosuficiencia alimentaria. Tanto porque es una manera de continuar ligados a su tierra y de reproducir parte de su identidad, como porque constituye una estrategia familiar de aprovechamiento de los recursos propios (tierra, fuerza de trabajo familiar disponible, insumos parcelarios y animales de labran-

za) y también una manera de consumir un maíz criollo de alta calidad que, aun cuando la producción se autolimita al abasto familiar y su costo resulte mayor en esfuerzo de trabajo e inversión que los precios de mercado, aumenta su calidad de vida en términos de la características que su cultura reconoce como valiosas (Appendini *et al.*, 2003: 68; Sarabia, 2001: 193).

Entre los cultivos comerciales, el café es uno de los principales productos en algunos municipios indígenas. La región cafeticultora se encuentra en los municipios indígenas de Malinaltepec, Tlacopa, Metlatónoc, Acatepec y Zapotitlán Tablas en la región de La Montaña. Se trata de pequeños productores con extensiones muy pequeñas y bajo nivel tecnológico para los cuales la producción de café es la principal actividad económico-comercial. En la última década (1993-2003), la actividad cafetalera en la región experimentó un desplome en la producción del orden de un 25%; en tanto que el número de productores aumentó en más del 100% al pasar de 3 316 a 7 794 referidos a casi la misma superficie cultivada, lo que refleja categóricamente las pocas opciones productivas en la región (Díaz, 2005: 6).

La cafeticultura regional está integrada a las cadenas agroindustriales de menor valor agregado en los mercados del café (café soluble y populares), comercializándose a través de intermediarios que imponen precios homogéneos muy bajos, lo que aunado a las adversas condiciones del mercado internacional y a las prácticas oligopólicas de las grandes empresas, ha contribuido a que muchos productores de café hayan perdido hasta el 70% de sus ingresos. A pesar de ello, el café cumple un papel social muy importante, porque constituye una de las pocas fuentes de ingresos monetarios en la región (Díaz, 2005: 13; Carabias *et al.*, 1994: 47). En ciertas regiones indígenas de Guerrero también son importantes los cultivos de frijol, sorgo, sandía y cacahuete, en los cuales se observa también un comportamiento estancado o declinante en la producción y la productividad (Sarabia, 2001: 196; Nadal, 1999: 104).

Vinculada estrechamente al agro, la ganadería es una actividad importante en algunas regiones indígenas. Se organiza en forma familiar con manejos rústicos o tradicionales y se practica en forma extensiva de libre pastoreo y en cría de traspatio. Se caracteriza por su baja productividad y se destina fundamentalmente al autoconsumo (Sagarpa, 2005).

Otro nicho con potencial económico para las comunidades indígenas pero que hoy por hoy no ha generado un impacto económico en las unidades productivas rurales es el de los bosques. Aun cuando Guerrero es un estado con vocación forestal y una propor-

ción significativa de las zonas boscosas de la entidad se encuentra en las comunidades y regiones indígenas, las constelaciones de poder vigentes que se manifiestan en el acceso diferencial a los recursos, la falta de capital propio, de infraestructura caminera y de inversión, permiten que el recurso maderable sea explotado y usufructuado por los madereros rentistas y consorcios privados con la connivencia de autoridades agrarias y políticas (Carabias *et al.*, 1994: 46; GEG, 2005: 141). Además, buena parte de las zonas de vocación forestal en el estado se encuentran actualmente bajo control de narcotraficantes, con todo el cúmulo de dificultades y riesgos que ello implica (ver más adelante).

Por otra parte, aun cuando el estado de Guerrero es una de las entidades con mayor biodiversidad (cuarto lugar a nivel nacional), sus recursos naturales presentan un alto grado de deterioro (Semarnat-Guerrero, 2002: 15). Se estima que el 60% del territorio de La Montaña se encuentra con algún tipo de alteración ecológica y el 15% está incluso desprovisto de vegetación a causa de la expansión de la frontera agropecuaria y la explotación irracional del bosque, con riesgos de agotamiento de las potencialidades aún existentes (Carabias *et al.*, 1994: 46). En la zona Norte, el 61.8% de la superficie regional carece de cubierta vegetal natural, sosteniendo en su lugar áreas urbanas y zonas agrícolas y ganaderas, así como áreas en franco proceso de degradación (Semarnat-Guerrero, 2000). Estudios recientes señalan que el 76% de la superficie total de la entidad presenta erosión severa o moderada (*Idem*).

Por último, estas economías indígenas deficitarias se han visto diferencialmente afectadas por el crecimiento exponencial del narcotráfico en las zonas indígenas de Guerrero, de hecho, han sido su sustrato. En ese sentido, es significativo que tres de los cien municipios con más narcotraficantes de México se encuentren en La Montaña de Guerrero (Resa, 2001), lo que refleja que, en los entramados de exclusión, una más de las estrategias de sobrevivencia se vincula a la producción y comercialización de estupefacientes (GEG, 2005: 141).

Políticas públicas excluyentes

Las políticas públicas tienen un impacto en las opciones y calidad de vida de la población e inciden en la productividad, los indicadores de bienestar, el acceso diferencial a los recursos locales y en la estructuración de las relaciones sociales, de ahí que factores restrictivos del medio ambiente y el bajo rendimiento de la productividad deben ser considerados a la luz de un proceso económico y político complejo (Narotzky, 2004: 27).

Adicional a la secular exclusión de los indígenas de las políticas públicas de bienestar, los sucesivos estados nacionales marginaron a los estados del sur respecto a las políticas asociadas a la producción y al desarrollo del país (Hall y Humphrey, 2003: 13); sumado a ello, el programa de ajuste estructural y de liberalización comercial implementado por el Estado a mediados de la década de los ochenta del siglo xx afectó también a los pequeños productores campesinos, entre ellos a los indígenas.

En este programa neoliberal, una de las metas fijadas para el sector agrícola fue reducir la población económicamente activa destinada a la agricultura, de un 26% a un 5% a nivel nacional, ya que el agro aportaba un 7 u 8% del Producto Interno Bruto pero retenía a la cuarta parte de la población económicamente activa y, de acuerdo con la visión tecnocrática en turno, ningún país desarrollado tenía más del 10% de la población económicamente activa en el sector agropecuario (Fox, 2005: 35).

Esta reducción estaba dirigida en particular a los productores cerealícolas de escasa productividad, en especial a los de autosubsistencia. Se pensaba que, al ser excluidos de la producción de granos, dejaría el terreno libre a los sectores más eficientes y competitivos internacionalmente para la reconversión productiva del campo, reorientando la producción, según las señales del mercado hacia la horticultura, los pastizales, las plantaciones forestales y los productos exóticos (Sarabia, 2001: 190; Quintana, 2001; Von Bertrob, 2004: 763; Bartra, 2005: 6). El exceso de demanda de maíz se cubriría con las importaciones del grano de Estados Unidos, calculando desde entonces que la medida desataría un éxodo rural de alrededor de 800 000 mexicanos (Taylor *et al.*, 1999: 653). Ante las medidas previstas y adoptadas, los productores del sur del país fueron los más vulnerables, ya que su agricultura estaba más atrasada que la de las demás regiones de México en términos de inversión, técnicas modernas y productividad (Hall y Humphrey, 2003: 13).

Para desalentar la producción agropecuaria de granos básicos y desincentivar la producción alimentaria de los pequeños productores agrícolas, se les marginó y excluyó de las políticas públicas asociadas a la productividad (Appendini *et al.*, 2003: 66); así, por ejemplo, los estados del sur, con un 45% de la población rural y un 23% de la producción agrícola y ganadera, sólo recibía el 9% de los subsidios agrícolas federales (Hall y Humphrey, 2003: 13).

En el marco propiamente del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los pequeños productores agrícolas de autosubsistencia no

experimentaron beneficio alguno (Appendini, 1994: 60; Romero y Puyana, 2004: 10). No obstante, ante la eliminación de los precios de garantía, se instrumentó una política de transición para “ayudar a los campesinos” a enfrentar la competencia en el subsector de los granos y oleaginosas mediante pagos directos a los agricultores: el programa denominado Procampo. Se consideraba que los apoyos de este programa permitirían a los agricultores reconvertirse a actividades en las que fueran más competitivos. En la práctica, este apoyo directo ha constituido más un subsidio al consumo de los pequeños productores que una verdadera política agrícola (Salcedo, 1999: 22 y 72) de la cual se hayan beneficiado realmente los campesinos en términos estructurales.

Por otra parte, dado que la oferta nacional de cultivos de exportación no resultaría suficiente para emplear a los trabajadores que se desocuparían por el declive de la producción de cultivos cerealícolas, estaba de hecho previsto un aumento de la migración, en la que los trabajadores desplazados de la agricultura se dirigirían a las fincas agroexportadoras o bien al sector industrial urbano (Taylor *et al.*, 2003: 2).

¿Cuál es el balance de una política agraria que profundiza la exclusión rural del más amplio sector productivo, es decir, del 70% de los pequeños productores de maíz en donde se incluyen los productores indígenas de Guerrero?

A veinte años del establecimiento de estas políticas, se reconoce que, en efecto, los productores de autoconsumo fueron los más directamente afectados por el TLCAN y por la carencia de créditos, inversiones en obras de irrigación subsidiadas, insumos agrícolas a bajo costo y acceso a las nuevas tecnologías y avances científicos (Romero y Puyana, 2004: 10). Por ende, y conforme a lo esperado, la población dedicada a la agricultura ha decrecido progresivamente, pero no en los porcentajes previstos, ya que la población económicamente activa en este sector aun se mantiene en un 14% y no en el 5% fijado a nivel nacional, mientras que, en el estado de Guerrero, el 30.2% de la población sigue empleándose en el sector primario (ENOE, 2005).

Respecto a la reorientación de los productores ocupados en cultivos cerealícolas “no competitivos” (como el maíz) hacia el de bienes “competitivos” y de exportación, hasta el momento, la producción nacional cerealícola no sólo no se ha colapsado sino que ha aumentado, y ello, en parte, gracias a los pequeños productores de temporal que no producen para el mercado y a pesar de las previsiones y cálculos referidos en el TLCAN (Yúnez y Barceinas, 2003: 11). Si bien el estado de Guerrero presenta una situación

similar a la señalada para el conjunto del país (Nadal, 1999: 104), la superficie cosechada tiende a disminuir. La mayoría de los productores señalan que se ha dejado de sembrar maíz de manera significativa, principalmente como consecuencia de la migración de la gente joven (Sagarpa, 2006: 8), a pesar de ello, Guerrero contribuye con el 4.5% del total de la producción nacional y registra rendimientos de 2.186 ton/ha. El estado se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional, con una producción de 812 mil toneladas anuales, entre las que destacan localmente como zonas productoras las de Altamirano y Chilpancingo (Martínez, Caamal y Mendoza, 2000: 31), mientras que la producción maicera es deficitaria en los municipios y regiones mayoritariamente indígenas del estado (Sagarpa, 2006: 39 y 9).

Por último, el TLCAN y las reformas en las políticas agrícolas, aplicadas desde mediados de los ochenta, aceleraron la migración desde muchas comunidades rurales superando todas las previsiones. Se calcula que el número de emigrantes del sector rural mexicano encaminados a Estados Unidos aumentó un 452% en 2002 respecto de 1980 (Yúnez *et al.*, 2004: 190; Taylor *et al.*, 2003: 3). En Guerrero, es notorio un ascenso en la intensidad de la migración interna en el periodo 1995-2000 respecto de los quinquenios anteriores y un aumento en la emigración internacional acompañada de una disminución en el porcentaje de población que regresa al país al cabo de cinco años. En consecuencia, el saldo neto migratorio a nivel estatal es negativo; este fenómeno se observa en la mayor parte de sus municipios indígenas (INEGI, 2005: 20).

Así, una consecuencia de la crisis de rentabilidad de la agricultura tradicional es el estrecho vínculo entre los bajos niveles de desarrollo productivo y la migración temporal y permanente, por lo que cabría esperar que los estados con mayor número de unidades agrícolas de subsistencia y los más bajos niveles de ingreso y de tecnología productiva, sufran el mayor impacto por la emigración de productores de maíz (Nadal, 1999: 149).

Éste sería el caso justamente del estado de Guerrero, donde, como ya se mencionó, el ingreso per cápita es aproximadamente un 54% del ingreso nacional promedio (Carrasco, 2001: 3) y el 70% de las unidades de producción son de subsistencia, con condiciones precarias de capitalización y mecanización (Nadal, 1999: 103). En esta lógica, la población indígena de la entidad tiene una mayor presión para emigrar, ya que el ingreso se reduce al 33% del promedio nacional y las unidades de producción de subsistencia se elevan a un 95%. Sin embargo, un fenómeno ampliamente estudiado es que la falta de sol-

vencia económica entre los más pobres es justamente un factor que desalienta su migración, situación que se había observado entre los indígenas de Guerrero hasta antes de la última década del siglo xx.

Aquí cabe tomar en cuenta la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), pues:

Las transformaciones estructurales y el desmantelamiento de instituciones y programas de gobierno en relación con la cadena alimentaria han afectado los derechos humanos de un gran número de personas que participaban en dicha cadena, cancelándoles sus fuentes de ingreso, reduciendo las posibilidades de producción para el autoconsumo y aumentando la vulnerabilidad de los productores que permanecen en la actividad, ante la alta volatilidad de los mercados internacionales de alimentos (Citado en Kompass, 2003: 108).

El mismo Banco Mundial ha reconocido que en México: “a pesar de que el sector agropecuario ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas, los resultados han sido decepcionantes, ya que han propiciado el estancamiento del crecimiento, la falta de competitividad externa y el aumento de la pobreza en el medio rural” (Shengman y Woicke, 2002: 11).

Sobre el apartado de pobreza, expertos como De Janvry *et al.* (2002: 3) y De Janvry y Sadoulet (2004: 116) aceptan que la incidencia de la pobreza en el sector rural no ha disminuido en los últimos 30 años, que la pobreza está fuertemente concentrada en ciertas regiones del país, como en el caso de la región de La Montaña de Guerrero, que los indígenas son los más pobres y que, en las dos últimas décadas, el 77% de la disminución de la pobreza rural con respecto a la pobreza urbana provino de la migración. Solamente el 23% de la disminución de la incidencia de pobreza en el sector rural se atribuye al aumento del ingreso rural.

Redes de movilidad indígena

Dada la carencia estructural de empleo en las comunidades indígenas, obtener un ingreso monetario fuera de la producción de mercancías tradicionales, de la venta al menudeo o del trabajo esporádico en actividades agrícolas o no agrícolas, sólo es posible mediante la migración temporal o definitiva de sus lugares de origen, de ahí que el abanico de las estra-

Redes de migración entre los jornaleros agrícolas en Morelos

*Kim Sánchez Saldaña**

La migración de jornaleros agrícolas en México es un fenómeno de gran importancia en la actualidad, que involucra a cientos de miles de familias rurales de escasos recursos que se movilizan fuera de sus regiones de origen en busca de un ingreso salarial. Guerrero ocupa el primer lugar entre las entidades de expulsión más relevantes del país, con corrientes migratorias masivas que han entretejido diversas redes a lo largo de sus trayectorias como trabajadores del campo.

De acuerdo con una encuesta realizada a 8 117 jornaleros jefes de hogar en las principales regiones agrícolas del país, el 29.3% de ellos había nacido en Guerrero (Grammont y Lara, 2004).

La mayoría de estos desplazamientos son de carácter temporal y tienen como principal destino los grandes polos de atracción de mano de obra en el noroeste del país, orientados a la agroexportación. Pero también otras regiones agrícolas de menor escala son escenario de múltiples flujos de población que cubren una intensa demanda de trabajo en diferentes cosechas para la agroindustria, el mercado nacional de productos frescos y el comercio exterior. La magnitud, temporalidad, modalidades de contratación y origen de estos contingentes de trabajadores varían en cada caso.

En este contexto, el estado de Morelos cuenta con algunos cultivos que se han articulado con diversos movimientos migratorios: la caña de azúcar, el ejote, el jitomate y el angú. La especialización regional en la producción agrícola y la mano de obra requerida, así como la forma en que se fueron conformando sus propios mercados laborales, han dado lugar a nichos diferenciados para esta población migrante.

La entidad de origen de la mayor parte de los jornaleros agrícolas que llegan a Morelos es Guerrero y en menor proporción de Oaxaca y Puebla. Los guerrerenses provienen de comunidades indígenas nahuas, mixtecas y tlapanecas localizadas en las regiones de La Montaña, Costa-Montaña, Norte y Centro. Viajan solos, en grupo o acompañados de familiares y permanecen en campamentos o localidades cercanas a los campos agrícolas donde se contratan. Cuando concluyen las respectivas temporadas de cosecha, generalmente, retornan a sus pueblos; una minoría tiende a establecerse y se mantienen vinculados a las labores del campo.

Sus empleadores son, por lo común, pequeños productores que no pueden ofrecer un empleo estable y continuo toda la temporada, pero cuya eficiencia productiva depende de la disponibilidad de mano de obra eventual, flexible y barata.

Las redes sociales de los migrantes cumplen un papel fundamental para que, pese a sus limitaciones, esta articulación se produzca y reproduzca en el tiempo. Sus funciones son múltiples: desde la posibilidad de acceder al empleo, negociar sus condiciones de trabajo y sobrellevar la vida

* Profesora investigadora del Departamento de Antropología, Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

cotidiana en un medio ajeno a su comunidad, su lengua y sus costumbres.

Antes de ahondar en la importancia que tienen estas redes se describen brevemente las principales regiones agrícolas de Morelos que ocupan mano de obra foránea y algunas de sus características. Cabe mencionar que no existe un registro fiable del volumen de esta migración temporal, pero en cálculos conservadores se puede considerar que representan una población de cinco a siete mil personas, entre trabajadores y acompañantes, distribuidas en diferentes regiones y épocas del año.

No están registrados en la PEA agrícola pese a su importancia, ni existen datos confiables sobre la magnitud de los trabajadores migrantes, ya que su número y tiempo de estadía son variables. Estimaciones del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Sedesol indican que esta población ha llegado hasta diez mil personas, no obstante, también consideran que ha aumentado la tendencia al asentamiento de familias que engrosan las filas de los peones locales.

Polos de atracción de jornaleros migrantes

En primer lugar, se encuentra la zona cañera de los valles irrigados, la cual tiene mayor antigüedad en el empleo de fuerza de trabajo estacional para la zafra. La contracción de la agroindustria azucarera en Morelos, agudizada en años recientes por diferentes conflictos de alcance nacional, se ha traducido en el cierre de ingenios, reducción de las superficies de siembra, maquinización parcial del corte, entre otros y con todo ello, menor demanda de trabajo. Este hecho, aunado al asentamiento de algunos migrantes en periodos previos, ha llevado a una drástica disminución de los jornaleros foráneos. En la actualidad, los trabajadores transitorios llegan a siete albergues o campamentos cañeros que abastecen los ingenios de Emiliano Zapata de Tlaltizapán y La Abeja de Casasano. Las condiciones de trabajo en el cañaveral son, por demás, precarias y perciben bajas remuneraciones por su ardua labor.

En segundo lugar, se encuentra la región ejotera, al oriente de la entidad, sustentada en la actividad de pequeños productores que venden al mercado interno y, en menor medida, para exportación. En la última década se registra una mayor superficie sembrada y sus necesidades de mano de obra para la cosecha entre noviembre y marzo. Existe un arraigado sistema de intermediarios laborales, los capitanes, que controlan cuadrillas de 20 a 60 peones y en donde se incorpora mano de obra familiar. Los migrantes se dirigen a unas pocas localidades que funcionan como centros de operación de este mercado de trabajo. También en este caso ha habido cierta tendencia de los migrantes a establecerse en asentamientos precarios en Tenex-tepango, municipio de Ayala.

En tercer lugar, está la producción de jitomate en la región conocida como los Altos de Morelos. Incluye, asimismo, el cul-

tivo de otras hortalizas de temporal como el pepino y el tomate, cuya estacionalidad difiere del resto. La demanda se concentra en los meses de agosto a octubre y destaca por la ausencia de intermediarios. Los trabajadores se contratan directamente con los productores cada día, pues el tamaño de las parcelas y oscilaciones de la demanda limitan la ocupación continua. Sólo unas cuantas familias han decidido quedarse en Morelos.

Por último, en el sur de la entidad se encuentra un enclave empresarial dedicado al cultivo de angú, una hortaliza no tradicional de exportación que aglutina en campamentos agrícolas a los jornaleros migrantes que son trasladados desde sus comunidades junto con familiares a partir de noviembre. La empresa ha promovido que algunos de los migrantes se conviertan en “encargados” de sus “paisanos”, que operan como intermediarios laborales.

Las redes en el reclutamiento y el ámbito laboral

De acuerdo con diferentes circunstancias históricas, cada región agrícola ha establecido puentes de contacto con un número variable de localidades de Guerrero que, a la postre, son su ámbito privilegiado de aprovisionamiento de mano de obra. No es difícil imaginar que luego de que uno o más migrantes consiguieron emplearse en determinados cultivos, alentaron a sus parientes y amigos a trabajar en la siguiente temporada. En muchas ocasiones, los propios productores y encargados ofrecieron a aquellos primeros contactos el compromiso de contratar a los “paisanos” que vinieran dispuestos el próximo año. Incluso, en algunos casos, la creciente demanda de mano de obra llevó a al reclutamiento directo en los pueblos de origen de los migrantes por medio de “enganchadores” y a brindarles algún alojamiento.

El surgimiento y desarrollo de estos mercados de trabajo avanzaron así apoyados en las redes sociales que son conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, primeros migrantes y no-migrantes en las áreas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un origen común, ya que los lazos interpersonales facilitaron la difusión de las oportunidades de trabajo y sus ventajas relativas, fueran éstas la cercanía, la estacionalidad, el salario y las modalidades de pago, el transporte de bajo costo o gratuito. Claro está que para muchos migrantes esta experiencia laboral ha sido ocasional o descartada por diversas razones, entre las que destacan el predominio de la inseguridad laboral y los riesgos de desempleo por sobreoferta de trabajadores. Muchos de estos jornaleros prefieren emplearse con grandes empresas que dan cierta garantía de trabajo por varios meses, vivienda gratuita (aunque sea precaria) y traslado, aunque sea a gran distancia de sus pueblos como Sinaloa, y con sueldos iguales o más bajos.

Las redes sociales también han estado presentes en el funcionamiento de los sistemas de intermediación laboral que

controlan cabos, capitanes y encargados (excepto en la región jitomatera). En la medida en que el acceso al trabajo, así como la continuidad del empleo dependen de una buena relación con éstos —y por supuesto de su desempeño laboral—, los jornaleros recurren a las redes familiares y de paisanaje para obtener mejores oportunidades. Por su parte, los intermediarios pueden utilizar eficazmente estos vínculos para reclutar y organizar las cuadrillas, lograr cierta lealtad y disciplina en el trabajo. En el caso de los capitanes, por ejemplo, los migrantes empleados como “envasadores” pueden operar como punta de una madeja de redes parentales y de vecindad que ayudan a regular la oferta y demanda de mano de obra, así como el conjunto de las relaciones laborales con la cuadrilla.

En el ambiguo y dinámico rol de los intermediarios como representantes de los empleadores y de los propios trabajadores, las redes sociales de los migrantes y sus mecanismos informales cumplen una importante función en hacer que aquellos negocien mejores condiciones de trabajo y de vida. Por medio de éste y de otros recursos, los migrantes tratan de apropiarse de sus lugares de trabajo, dependan o no para ello de los intermediarios, a modo de contrarrestar la inestabilidad, la competencia y la precariedad del medio en que se desenvuelven.

Al mismo tiempo de ser un medio de defensa ante la segregación ocupacional de los migrantes en el medio rural, la autosegregación, que se atrinchera en las redes propias, retroalimenta una segmentación del mercado de su trabajo.

Las redes sociales en la vida cotidiana del migrante

Más allá del ámbito laboral, los migrantes y sus familias se enfrentan durante su estadía en Morelos a una cultura, un lenguaje y un medio ambiente distintos que, con el tiempo, se habitúan a aceptar y a los que tratan de adaptarse de la mejor manera posible.

Una vez más, las redes pueden hacer más llevadera su estancia, proporcionando un espacio social de intercambio de favores y servicios, o simplemente de convivencia con personas cercanas y afines a su cultura. La vivienda del migrante —sea ésta un campamento, cuarto alquilado o “ranchito” provisional— es un lugar en el que buscan aglutinarse por filiación varias familias. Sus “anfitriones” también prefieren hospedar a grupos emparentados entre sí, pues consideran que ello evita conflictos.

Además del ámbito doméstico, en las localidades morelenses receptoras de estos migrantes, plazas y canchas deportivas u otros lugares públicos, son frecuentados luego de la jornada o en días de “raya” por hombres jóvenes y familias no sólo para abastecerse de alimentos, sino como punto de encuentro con amigos, paisanos o parientes que trabajan en otras cuadrillas o viven separados. Un aspecto muy importante es participar de la información que circula sobre el propio mercado laboral, pero

también forma parte de los canales de comunicación de los migrantes con sus pueblos, en donde los recién llegados y quienes van de regreso contribuyen a circular noticias, dinero y otros bienes entre el nicho laboral y el lugar de origen.

Estos momentos de esparcimiento son más comunes en la región jitomatera, donde la jornada laboral es menor y viven dispersos en los mismos poblados a donde llegan, a diferencia de los cortadores de angú cuyos campamentos están un poco alejados de la vida cotidiana de las localidades que los reciben.

Redes, territorios migratorios y relaciones interétnicas

Como ya se ha mencionado, en las diferentes corrientes de jornaleros agrícolas se han desprendido familias que están en proceso de asentamiento o ya son residentes con cierta antigüedad en Morelos. Ejemplo de estos núcleos son colonias y barrios de los municipios de Tlalquiltenango, Tlaltizapan y Xochitepec, que derivan de los migrantes cañeros y en donde aún se forman cuadrillas para la zafra. Asimismo, en Totolapan en los Altos o en Tenextepango viven grupos de jornaleros que fuera de la temporada laboran en el campo o en la construcción.

Un caso ilustrativo de la manera en que estos grupos se mantienen vinculados con sus comunidades lo encontramos en Totolapan. Ahí, varias familias tlapanecas intensifican sus contactos a través de familiares o amigos que llegan a trabajar temporalmente en época de cosecha. Se suma a ello las visitas al pueblo, cuando su ahorro se los permite, en ocasión de fiestas familiares, del ciclo ceremonial u otros compromisos. Más allá de tales vínculos tradicionales, las comunidades en cuestión se encuentran articuladas con una larga experiencia en el corte de jitomate en Sinaloa, a donde año con año se dirigen importantes contingentes de familias de sus localidades y otras vecinas. En tales circunstancias, los asentados en Totolapan pueden recurrir fácilmente a las redes que ya existen con los sistemas de intermediación que los reclutarían para trabajar en el noroeste del país. Aunque dicha posibilidad es más bien socorrida, en caso de deudas, siempre está abierta.

Por otra parte, es oportuno considerar que el desarrollo de redes sociales también incluye los vínculos que los jornaleros migrantes han ido construyendo con la población local pues, a pesar de la elevada movilidad de esta población y de la relación fluctuante con los empleadores, se han formado flujos relativamente estables de jornaleros que se orientan a los mismos destinos. En sus recurrentes trayectorias, muchos han entablado relaciones con productores o intermediarios, dueños de cuarterías y otros pobladores locales. Entre los asentados, esas relaciones son más comunes e incluso han sido significativas en su inserción en el medio, pues les han permitido conseguir trabajo, el préstamo por parte de la población local de terrenos donde construyen

sus viviendas a cambio de mantener limpio el lugar de malezas y basura, entre otros. Tales intercambios de ayuda mutua o en solidaridad con los allegados son a veces fortalecidos con lazos de parentesco ritual a partir de los hijos nacidos en Morelos.

El hecho de que éstas sean relaciones marcadas por su carácter interétnico y socialmente asimétrico, no impide que sean parte del capital social que los migrantes integran en sus estrategias de subsistencia. Por su parte, los productores morelenses tienen en alta estima el trabajo de estos jornaleros por su gran rendimiento, resistencia física y disponibilidad para ajustarse al ritmo variable de las cosechas. Esta eficiencia y disciplina son, en buena cuenta, resultados de la habilidad manual en labores agrícolas y artesanales forjadas en la familia indígena tradicional,

así como de la especialización adquirida como jornaleros por generaciones. Son trabajadores muy calificados y, sin embargo, considerados como el último escalafón ocupacional del medio rural obligados a precarias condiciones laborales y limitado nivel de bienestar justificados por la discriminación social y cultural de los morelenses respecto a los “indios” de Guerrero.

La vulnerabilidad social de los jornaleros migrantes y asentados redimensionan la importancia de las redes sociales, fortaleciendo con ello un espacio de recreación cultural e identitaria. Paradójicamente, estas redes también han facilitado la construcción de un amplio mercado laboral disperso y escalonado que propicia la movilización de individuos y familias guerrerenses por diferentes regiones del país. ■

tegias (re)productivas que conlleva la migración ha ido ampliándose.

Inicialmente, algún miembro de la familia se incorporaba al servicio doméstico, a la industria de la construcción o al comercio ambulante en las ciudades. En las últimas décadas, ante la desarticulación de sus economías locales y el debilitamiento de las sociedades campesinas, los procesos de globalización han impuesto a los indígenas de Guerrero y de todo el país, en mayor o menor grado, nuevas formas de inserción a la economía, de manera que los ensayos de movilidad individual, familiar y comunitaria confluyen con los que generan individuos, familias y grupos de otras localidades, municipios o regiones indígenas hasta conformar, en algunos casos, verdaderas redes de movilidad.

Estas redes, articuladas en un movimiento de conjunto, adquieren su característica de fuerza de trabajo móvil, tanto en su adecuación a las exigencias variables del mercado —merced a su ubicuidad espacial—, como en su carácter de fuerza de trabajo sometida a todas las variaciones de duración, intensidad y productividad requeridas dentro del proceso laboral (de Gaudemar, 1991: 17). La libre movilidad geográfica de la fuerza de trabajo y su fácil adaptación a la cambiante circulación del capital en el espacio es hoy una condición necesaria para el trabajador desde el punto de vista del proceso de desarrollo capitalista (Harvey, 2007: 352).

Es justamente como “fuerza de trabajo móvil” que los indígenas están encontrando los elementos necesarios para su subsistencia, ya que ello les permite enlazar su reproducción social a las corrientes de flujo y acumulación de capital que se caracterizan por atravesar particulares coordenadas espaciales de desarrollo y concentración de capital: ciudades globales, zonas fronterizas, regiones de agricultura intensiva,

polos de desarrollo turístico, etcétera. Las redes de movilidad configuran las migraciones actuales, las cuales, como señala Canales y Zolniski (2000: 633) ya no se refieren necesariamente a un acto de mudanza de la residencia habitual, sino que se transforman en un estado y en una forma de vida.

Estas redes de movilidad se han ido construyendo colectivamente a lo largo de varios lustros por una sola generación o por cohortes intergeneracionales de migrantes indígenas. Entre ellas, la comunicación fluye a través de campos sociales comunes, lo que permite que unas redes se vinculen y se superpongan a otras, articulando nuevas trayectorias y polos de atracción con las rutas hasta entonces consolidadas, sopesando, en cada caso, la maximización de los beneficios y la reducción de riesgos.

En las familias indígenas es común que se entrelacen diferentes redes de movilidad. Por ejemplo, los padres e hijos pequeños continúan integrándose cíclicamente a las redes de movilidad asociadas a la agricultura intensiva, mientras que algunos de los hijos mayores ya se han asentado definitivamente en alguna de las zonas turísticas del país y otros más están incursionando como migrantes indocumentados en Estados Unidos sin definir aún si su estancia será definitiva.

A través de estas redes de movilidad, la población indígena busca anclarse en una amplia gama de empleos precarios, asumiendo la contingencia de su inestabilidad, inseguridad e insuficiencia. Esta estrategia de flexibilidad y desregulación laboral les coloca en condiciones de intercambio desigual y en nichos económicos relegados o desestimados por otros grupos sociales, no obstante, parece ser una importante oferta de puestos de trabajo para la población migrante (Canales, 2000: 171).

La “flexibilidad” en el empleo es estructural a la institucionalidad laboral de los mercados de agricultu-

ra intensiva nacional e internacional (Lara, 1992: 33) y a ciertos sectores fabriles y de servicios que operan en los márgenes grises de las normativas legales, contratando o subcontratando indocumentados en Estados Unidos. De ahí que las redes de movilidad indígena se hayan consolidado en torno a dos grandes vertientes no excluyentes entre sí: la que conforman como jornaleros agrícolas migrantes y la que les articula a la migración internacional indocumentada.

Ambas redes insertan a la población indígena en nuevos ámbitos de vulnerabilidad y discriminación (López, 2005: 161); paradójicamente, resultan ampliamente rentables en el nuevo régimen de acumulación de capital, en la medida en que precisamente su condición de indocumentados y su origen étnico contribuyen a la construcción de mercados laborales segmentados, con costos laborales de reproducción diferenciales y relaciones de poder asimétricas (Narotzky, 2004: 120).

Redes asociadas a la agricultura intensiva

La reestructuración del mercado agrícola imprimió un creciente dinamismo al sector de hortalizas y frutas en México, cuyos volúmenes físicos de producción y rendimiento promedio crecieron exponencialmente en la última década (Lara, 2006a: 2). La incorporación de nuevas biotecnologías permitió al sector agroexportador obtener ventajas competitivas, en tanto que la disponibilidad de una fuerza de trabajo abundante y barata ha sido su principal ventaja comparativa. Así, mientras la productividad del trabajo subió en 65% entre 1984 y 1996, el salario real disminuyó en 50%, manteniendo una mano de obra sometida a diferentes formas de discriminación o “minorización” (étnica, de género y edad) que se traducen en empleo precario en términos contractuales y salariales (C. de Grammont, 2003: 15).

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas estima en 3.4 millones el número de jornaleros agrícolas en el país; de éstos, casi dos terceras partes son jornaleros locales o población vecindada en las zonas de agricultura intensiva y 1.2 millones son migrantes provenientes de localidades lejanas (Sedesol, 2006: 1). Entre estos últimos, la proporción de población indígena se ha ido incrementando, pasando del 35 por ciento en 1994 (Arroyo, 2001: 109) hasta constituir el 48.9% de la fuerza de trabajo migrante en 2003 (Sedesol, 2006: 7).

No se tiene un registro actual y certero del origen, magnitud y dirección de los flujos de población jornalera migrante; sin embargo, de acuerdo con la

Balance de la participación de la población infantil de La Montaña en el trabajo agrícola

*Isabel Margarita Nemesio Nemesio**

La infancia ha sido considerada, con sus debidas variantes culturales, como una etapa de particular vulnerabilidad de los seres humanos, cuya protección se establece como un deber de la sociedad a través de sus instituciones (la familia entre ellas) y a partir del impulso de políticas públicas desde el Estado mismo. Sin embargo, poco o nada se ha legislado para las diferencias que privan en ese conglomerado que es la niñez y, a excepción de situaciones especiales de riesgo, se sigue pensando en los niños y las niñas como menores de edad con demandas, problemáticas y posibilidades semejantes, sin tomar en cuenta las diferencias socioeconómicas, de clase y de género que atraviesan su vida cotidiana y moldean su presente y futuro. Con respecto a la infancia indígena, ésta está marcada por las limitaciones que se reflejan en aspectos que van desde las expectativas de vida, hasta la calidad de la cotidianidad y las tareas que los niños y las niñas deben cumplir para asegurar su existencia.

La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer; un tiempo en que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar con brillantes planes para el futuro. Sin embargo, para 250 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, quienes trabajan mucho antes de que sus frágiles huesos y sensitivas almas estén preparados, la infancia es un sueño perdido. Estos niños y niñas no saben de otro juego que no sea la sobrevivencia. Aun siendo tan pequeños, saben lo que es obtener unas monedas a cambio de su trabajo para poder comer, se vuelven una estadística más de la esclavitud moderna. Ellos no conocen lo que es la justicia y la igualdad.

El ingreso precoz del trabajo infantil se encuentra vinculado a las condiciones de pobreza de las familias. Las familias pobres estructurales y las familias empobrecidas ante la situación de ajuste económico son colocadas en condición de vulnerabilidad social, esto es, que pierden su capacidad económica y cultural de contención. Esta situación de vulnerabilidad no es más que mantener un margen de exclusión social, donde disminuyen las posibilidades reales de alcanzar niveles de vida dignos. De esta forma, los niños y niñas realizan fuera de sus hogares diferentes actividades como formas o estrategias de sobrevivencia, que desarrollan como una manera de generación de ingresos.

Las actividades que realizan los niños y niñas para obtener ingresos solos o integrados a su núcleo familiar son asimilables a la idea de trabajo. El concepto de trabajo infantil no es tan sencillo ni claro como parece; por ejemplo, uno de los elementos que explica, en parte, la incidencia del trabajo económico infantil en las zonas indígenas del país es la precarie-

* Responsable del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales. Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

dad de las economías familiares de los niños y niñas indígenas, situación que va aunada a las costumbres y viejas tradiciones de utilizar el trabajo de los niños y niñas desde temprana edad en las actividades del campo, así como en la elaboración de artesanías y en las tareas domésticas del propio hogar, para producir o garantizar el suministro de los bienes y servicios de consumo básico que requiere la unidad doméstica.

Es decir, que los niños y niñas ayudan a las familias, pero estas actividades domésticas no se denominan trabajo infantil, se aplica más bien a aquellas labores desempeñadas por menores en condiciones más o menos regulares que les permite ganarse el sustento para sí mismos y sus familias. Es así que el trabajo económico infantil indígena presenta una situación de mayor precariedad comparada con el trabajo económico infantil a nivel nacional. La incorporación de éstos, a temprana edad, a algún tipo de actividad económica está asociada a la situación de pobreza o pobreza extrema en la que viven, en particular los miembros de las comunidades indígenas y de grupos desfavorecidos y marginados.

Los niños y niñas de La Montaña

Las niñas y niños indígenas que habitan la región de La Montaña, en el estado de Guerrero, conocen una infancia que va más allá de los juegos, de la convivencia con los amigos, de ir a la escuela o de beber y comer algo caliente por la mañana. Ellos participan desde temprana edad en actividades productivas y de reproducción de la unidad doméstica familiar, dentro de patrones de distribución y asignación de tareas organizados minuciosamente en función de la edad y sexo de los integrantes de la familia.

La inserción temprana en actividades productivas y socialmente reproductivas, tanto por necesidad como a manera de socialización, constituye uno de los impedimentos más difíciles de superar con respecto al acceso de los niños y especialmente de las niñas indígenas a la escuela.

Las posibilidades que las niñas y niños de La Montaña tienen de asistir a la escuela son variables, y dependen tanto de las condiciones particulares de sus familias como de las características de la comunidad en la que habitan y de los mismos planes de estudios oficiales. Pareciera que su acceso es restringido, y está condicionado por factores como la pobreza, la lejanía, el trabajo, cuestiones de índole personal y/o familiares, además de otros obstáculos como la calidad misma de la educación que se ofrece en la región y, en general, en el estado de Guerrero.

Se ha procurado proveer una educación adecuada y de calidad, pero los niveles y contenidos ofrecidos distan mucho de los estándares nacionales. En estas comunidades rurales imperan mucho los problemas con el gremio, ya sea por cuestiones sindicales o de reclamo social, además de la falta de maestros o del perfil de los mismos. Sin embargo, también prevalecen los problemas cotidianos de la falta de infraestructura y de material

didáctico para la impartición de clases, además del ausentismo como otro problema que no permite que se den las condiciones para cumplir con una educación básica.

Lo mismo se aplica para el acceso a los servicios institucionalizados de salud, como consecuencia de la marginación general que priva en sus comunidades. Los menores indígenas de La Montaña presentan elevados índices de desnutrición debido a la escasez de alimentos, la pobre calidad y diversidad de la dieta, una alimentación complementaria tardía al lactante y como resultado de enfermedades infectocontagiosas y hábitos alimenticios nocivos que afectan al 70 y el 80% de la población menor de cinco años.

Esta situación, lejos de mejorar, se ha ido agravando con el tiempo, en parte, debido a que los planes y programas oficiales de salud que se han implementado en el estado de Guerrero no han sido uniformes, la inversión en infraestructura sanitaria es mínima, la coordinación de las acciones institucionales apenas ha sido puntual, el modelo curativo continúa prevaleciendo sobre el preventivo y ha habido poca sensibilidad a la situación de la salud, principalmente, de las comunidades indígenas que habitan en el estado.

Las tres principales causas de muerte en menores de edad en La Montaña están directamente asociadas con las condiciones de pobreza y marginación: desnutrición y anemia, enfermedades respiratorias e infecciones gastrointestinales; al mismo tiempo, destacan las muertes por problemas perinatales.

Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2006 y el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2005, consideraron a municipios como Metlatónoc y Cochoapa el Grande como de alta marginalidad, de hecho, fueron comparados con las situaciones similares a las que se viven en el continente africano.

Ante esta realidad, la infancia de las niñas y niños indígenas de La Montaña de Guerrero, constituye una etapa fundamental en la conformación de su identidad social y cultural; sin embargo, para la gran mayoría de estos niños y niñas se trata sólo de un continuo uniforme en el que los años tendrán que transcurrir sobre la línea de la sobrevivencia para alcanzar la madurez y la condición de la edad adulta, mientras que esos mismos años son consumidos por el trabajo que desempeñan fuera de su hogar en condiciones de explotación o de semiesclavitud, con la finalidad de asegurar la reproducción de las próximas generaciones de niños y niñas indígenas de La Montaña como reserva del trabajo infantil ilegal.

Situación del trabajo infantil indígena en las actividades agrícolas de exportación

La inserción de la población infantil indígena de La Montaña de Guerrero en los sectores de actividad guarda una estrecha relación con el tipo de tareas que desempeña, acorde con la mayor

participación de los niños y niñas, la mayor parte son trabajadores agropecuarios o, mejor dicho, jornaleros agrícolas, ocupación que desempeñan ocho de cada diez niños y niñas indígenas. Haciendo un balance de la situación, se puede estimar que siete de cada diez niños realizan dichas tareas, mientras que en las niñas la proporción es de cinco de cada diez, lo que significa que uno de cada cinco niños y niñas labora un número de horas semanales que puede calificarse como sobrejornada.

El trabajo que desempeñan como jornaleros agrícolas fuera de La Montaña de Guerrero es una de las actividades más recurrentes en la población infantil indígena. Dicha actividad es generacional, porque es común escuchar a los más viejos decir que: “desde hace más de veinte años que se iban al estado de Morelos a trabajar en el corte de elote, jitomate o ejote”. Posteriormente, se fueron desplazando hacia el estado de Sinaloa; cuando los rumores de que allá había trabajo y que era mejor remunerado, fueron cambiando su ruta.

Después cambiaron la estrategia de trabajo porque en aquellas zonas hortícolas empleaban a la familia completa o, por lo menos, a aquellos que tienen la condición y capacidad física de resistir las actividades agrícolas como escarbar, plantar, cortar, empacar y cargar. Por ello, los jornaleros, al migrar, ampliaron el concepto de jornaleros agrícolas, al de familias indígenas jornaleras, con el agregado de que son migrantes, y así fueron delimitando la ruta de trabajo hasta marcar el Pacífico como una de las más recurrentes.

Esta ruta cubre los ciclos agrícolas de las zonas de expulsión, como las de atracción de mano de obra jornalera, que es aquella ruta en la que, hace más de 20 años, los niños y niñas de La Montaña se han incorporado al trabajo agrícola que depende de grandes empresas transnacionales, dedicadas a la exportación de productos hortícolas y principalmente responden a la demanda del mercado estadounidense.

En México, existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas. Casi el 20% de su fuerza laboral está constituida por menores de seis a 14 años de edad. Este grupo registra el más alto grado de rezago educativo del país. Según el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (Pronim) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 50% de los niños que asisten a la escuela se encuentra en el primero o segundo grado de primaria. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que el 90% no asiste a la escuela; de este porcentaje, se calcula que el 45% de los menores presenta cuadros severos de desnutrición.

Con todo, para los infantes de mayor edad, o de aquellos que tienen alrededor de los 12 años, con dificultad concluyen la educación primaria y muchos de ellos no continúan con la secundaria y se insertan en las actividades económicas o se hacen cargo de las tareas del hogar.

De manera específica en el estado de Guerrero, la coordinación estatal del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

(PAJA), a través de su Censo de Población en la temporada de migración que inició en 2006, contabilizaron un total de 40 207 jornaleros agrícolas, de los cuales 25 448 se desplazaron hacia el estado de Sinaloa.

De la región de La Montaña se registró un total de 14 021 jornaleros, de los cuales 11 293 están considerados como jornaleros en edad de trabajar, es decir, que van de los seis años en adelante. Los municipios con peores niveles de desarrollo humano (Tlapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande) son precisamente los municipios que más mano de obra expulsan a los campos agrícolas.

Son varios los factores que obligan a las familias a emigrar, y van desde el económico hasta el cultural-social, pasando por el religioso, o por cuestiones políticas; pero, finalmente, una de las más apremiantes es la necesidad de comer y de vestir. Si la familia indígena genera un recurso para garantizar un ingreso económico de ahorro en los siguientes meses, es resultado de las estrategias que diversifica la familia respecto a las actividades laborales remuneradas que desempeña cada uno de sus miembros.

Esos ingresos se convierten en el elemento vital que les permite sobrevivir determinada temporada después de que concluyen sus actividades como jornaleros agrícolas.

Pero como se ha mencionado, los ciclos migratorios tanto en la región de La Montaña como en el estado de Guerrero, se han ido diversificando en los últimos tres años (2004-2006); bajo este escenario, los niños y niñas jornaleros se ven sumamente afectados, ya que difícilmente pueden continuar con su educación básica, considerando a los que están inscritos dentro de los planes de estudio de cada ciclo escolar; sin embargo, hay un enorme rezago por parte de aquellos que nunca han cursado la escuela, y, además, la prioridad es el trabajo colectivo familiar, situación que se puede controlar si el niño o niña asiste a la escuela después de que concluye sus actividades laborales. Sin embargo, esto significa mantener a estos niños y niñas en situaciones extremas, por la simple razón de que un niño, después de haber desempeñado cierta labor durante una jornada de ocho horas de trabajo, termina exhausto, ya que hablamos de menores de edad que están desnutridos.

Su calidad nutricional es muy baja y le invierten demasiada energía al trabajo, por lo que existe un agotamiento físico y mental extremo, su desempeño es bajo o nulo, tomando en cuenta que su capacidad de aprendizaje es reducido, lo cual los limita, así como el interés que puedan tener de integrarse, de asistir o de permanecer en la escuela.

Ésta es una realidad que viven cotidianamente los miles de niños y niñas indígenas de La Montaña de Guerrero, donde la balanza misma los coloca al extremo de la sobrevivencia, mientras que del otro lado, el límite es el exterminio, la marginación, la discriminación y la exclusión. Ellos no saben qué son los derechos de los niños y de las niñas, desconocen qué significa la igualdad, el respeto y la equidad.

Con el trabajo que desempeñan como jornaleros agrícolas, saben que van a percibir un ingreso que les permitirá sobrevivir el tiempo que estén en su lugar de origen, pero desconocen que esas mismas actividades que realizan significan explotación, no sólo de sus capacidades físicas, sino de un proyecto de vida que podría ser diferente para ellos mismos.

Ante este escenario, en materia legislativa, es prioritario hacer respetar y valer las normas nacionales e internacionales para atender la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que la edad para trabajar no debe ser menor a la edad en que termina la educación básica o, en todo caso, a los 15 años, y para garantizar congruencia con lo que suscribe el artículo 123 —donde se fija en 14 años la edad mínima para trabajar— con el artículo 3° constitucionales, que establece que la educación básica abarca la primaria y la secundaria, que termina alrededor de los 15 años. Asimismo, es conveniente que en México, como en los diferentes estados del país, se promulgue, promueva y aplique la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, así,

atender lo que establece el artículo 4° de la Constitución mexicana en lo que respecta a “respetar y cumplir con los derechos de los niños y niñas”.

La misma OIT ha dedicado esfuerzos para la eliminación del trabajo de los niños y niñas, así como de la promoción de su bienestar en los ámbitos de su competencia, a través de sus declaratorias en el Convenio 138, que contempla la edad mínima de admisión al empleo por parte de los menores de edad.

Sin embargo, los lineamientos en torno al trabajo infantil aparecen en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sin que en México y Guerrero nuestras autoridades las hagan valer. Por ello, es conveniente diseñar e instrumentar la construcción de una política integral de atención a la infancia y, particularmente, aquella diseñada para erradicar el trabajo infantil y mejorar la situación de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y más cuando se menciona a la población infantil indígena que desde temprana edad cambia los juegos y la diversión por los surcos y las hortalizas. ■

información recabada por el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas, a partir de 1998 —aun cuando existen fluctuaciones año con año—, Guerrero es la entidad federativa que abastece la mayor proporción de mano de obra jornalera que se desplaza continuamente en el interior del país. En ese año, casi tres de cada diez jornaleros (27.86%) provenían de este estado, desplazando a Oaxaca, que representó el 17.94%, mientras que Veracruz y Puebla contribuyeron con porcentajes menores, de 7.19 y 3.75% respectivamente (Arroyo, 2001: 112).

El peso significativo de Guerrero como proveedor de mano de obra en los mercados de trabajo agrícola nacional se hace visible cuando se pondera el lugar de origen de la mayoría de los jornaleros migrantes en los polos de atracción. En Morelos, el 83.7% de los jornaleros agrícolas proviene de Guerrero; en Nayarit el 71.9%, en Sinaloa el 46.9%, en Michoacán el 44.5%, en Baja California el 42.5%, en Baja California Sur el 37% y en Sonora el 23.83% (Sedesol-Pronjag, 2000).

Por otra parte, el valor estratégico que la migración jornalera tiene para la reproducción indígena también puede vislumbrarse por el número total de trabajadores agrícolas que migran: en 1999 se contabilizaron 37 155 jornaleros migrantes provenientes del estado de Guerrero (Sedesol, 2001: 185), aun cuando se calcula que el subregistro es del orden de un 50%, por lo que las cifras reales podrían aproximarse cada año a los 75 000 jornaleros guerrerenses migrantes (Aguilar, 2006: 15).

La migración indígena jornalera proveniente del estado de Guerrero ha ido estableciendo rutas, consolidando ciertos destinos, modificando trayectorias y temporalidades migratorias a lo largo de varias décadas. A finales de la década de los sesenta y durante la década de los setenta, la principal red de movilidad se dirigía a las zonas cañera y jitomatera de Morelos y a las zonas cañeras de otros estados como Veracruz. En estas regiones se permanecía por un periodo de tres a cinco meses, y se retornaba a sus lugares de origen con el propósito de preparar las tierras para la siembra.

A partir de la década de los setenta y durante los años ochenta, las redes de movilidad confluyen progresivamente en el corredor agroexportador del Pacífico, y se mantiene la migración jornalera a Morelos y un flujo interestatal que de antaño se dirigía a la zona cafetalera de la Costa Grande o al corte de melón en la Tierra Caliente, lo que cancelaba la migración cañera a otros estados como Veracruz (Canabal, 2001: 43).

Actualmente, para ganar de 2.5 a 3.2 salarios mínimos nacionales en los mercados de trabajo rural de agricultura intensiva (Sánchez Muñozhiero, 2002: 40), la población indígena de Guerrero mantiene vigentes redes de movilidad fluidas que lo mismo enlazan un desplazamiento a la zona melonera en la Tierra Caliente (Ciudad Altamirano en el propio estado de Guerrero o los municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán), que recorren 400 km para emplearse con los pequeños productores de Morelos o extienden su radio al rango de los 700 a 2 500 kilómetros, para contratarse temporalmente en el corre-

dor agroexportador del Pacífico, que incluye a los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur y, en ocasiones, si se pretende obtener un salario mínimo en dólares, se extiende sobre la línea transfronteriza a las zonas agrícolas de California, hasta llegar a entidades más lejanas, como Oregon y otros estados, a pesar del incremento actual en los riesgos y transacciones inherentes al cruce de la frontera. En cualquiera de estos flujos migratorios, la contratación es eventual, las condiciones de vida son precarias y se cuenta con escasa o ningún tipo de prestación social.

De acuerdo con los datos de la Coordinación Estatal de Guerrero del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJAG), en el ciclo 2000-2001, el mayor flujo de jornaleros indígenas guerrerenses a destinos nacionales se dirigió a los campos hortícolas de Sinaloa (85%), a Baja California (8%), a Sonora (3%) y a Jalisco (3%).

Según la zona o región de que se trate, las redes de movilidad jornalera revisten particularidades específicas e integran, en un ciclo anual, dos o más destinos, o prolongan la estancia en un estado del corredor Pacífico por lapsos que superan el ciclo anual. La tendencia actual es a mantenerse en el mercado de trabajo asalariado como jornaleros agrícolas de manera continua, siguiendo la trayectoria y temporalidad de las cosechas de uno o varios estados durante un periodo de cuatro a seis meses (Sedesol, 2006: 5).

En 1998, hace ya diez años, el 47.7% de los jornaleros agrícolas encuestados a nivel nacional declaró vivir exclusivamente de su trabajo asalariado; para 2003, la cifra se elevó al 66.8%, por lo que ha disminuido la proporción de jornaleros que continúan desempeñándose como pequeños productores en sus propias localidades, pasando del 35.7% en 1998 al 16.2% en 2003 (Sedesol, 2006: 4). Aun cuando la mitad de los jornaleros refiere tener tierra en su pueblo de origen, no la cultiva a causa de su deterioro agroecológico, su bajo rendimiento o por falta de recursos (Lara, 2006b: 5). De hecho, el 24% de los jornaleros jefes de hogar, incluso ya no tienen casa en su pueblo natal (C. de Grammont y Lara, 2004: 51).

Las ganancias obtenidas en la actividad jornalera contribuyen sustancialmente a la manutención de la familia durante el resto del año en sus lugares de origen (Barrón, 2001: 122). Sin embargo, los datos estadísticos muestran una disminución de la capacidad de ahorro del grupo doméstico, habiendo pasado del 51% de los jornaleros en 1998 a 42.6% en 2003 (Sedesol, 2006: 5), lo que aunado a la mermada capacidad del núcleo familiar para mantener la producción de autoconsumo, orilla a ampliar el tiempo que se des-

tina fuera de la localidad de origen en los mercados de agricultura intensiva, aumentando con ello el ahorro que individuos y familias llevarán de regreso a su pueblo (Barrón y Rello, 1999: 262).

La migración jornalera indígena tiene carácter comunitario, es decir, engloba a individuos, parientes o familias de un mismo lugar de origen. En general, los jornaleros proceden de localidades de menos de 5 000 habitantes; se trata, incluso, de pequeñas localidades de menos de 1 000 habitantes dedicados a la agricultura de subsistencia (Lara y Ortiz, 2004: 7). Entre las principales razones por las que se migra, destacan evidentemente la falta de trabajo y de ingresos monetarios (Arroyo, 2001: 111). La estructura por edad de la población jornalera migrante refleja un predominio de gente joven: el 49.3% tiene menos de 25 años y hay que destacar que incluso el 28.8% es menor de 15 años (INEGI, 2002: 95). Más de la mitad de los jornaleros viajan en familia para poder emplear toda la fuerza de trabajo disponible y así obtener un mayor número de salarios, incluyendo el aporte económico de 17.8% de los niños de entre 6 y 14 años de edad (Sedesol, 2006: 11), por lo que seis de cada diez niños comprendidos en este grupo etáreo no asiste a la escuela (Sánchez Muñozhiero, 2002b: 5).

El mayor flujo de jornaleros agrícolas migrantes temporales proviene de la región de La Montaña y se dirige a Sinaloa. Se calcula que cerca del 15.3% de la población de esta región guerrerense migra anualmente (Canabal y Flores, 2004: 48). Un rastreo parcial elaborado por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del estado de Guerrero (PAJAG) en la región de La Montaña, basado en la población jornalera migrante que llega a registrarse a sus oficinas locales, reporta que en 2004, 11 507 indígenas montañeros, en su mayoría de origen mixteco y tlapaneco, migraron. Los municipios con mayor expulsión fueron: Metlatónoc, con 4 776; Tlapa de Comonfort con 3 706 y Alcozauca con 760 (González, 2006); sin embargo, las redes de movilidad también integran grandes contingentes provenientes de Atlixitac, Chilapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo y Coahuila el Grande, municipios todos con altos niveles de marginación. En la región Norte y Centro del estado, destaca la migración jornalera indígena de los municipios de Copalillo, Tepecoacuilco de Trujano, Eduardo Neri y Mártir de Cuilapan.

Una tercera vía: las redes de movilidad asociadas al comercio artesanal

A partir de los años sesenta, la producción y venta de artesanías sustrajo a los pueblos nahuas del Alto Bal-

sas de las redes de movilidad agrícola para insertarlas en un nuevo tipo de movilidad que les permitía, a través de su inserción en el mercado de trabajo informal, un mayor ingreso económico y autonomía. Esta nueva red de movilidad se dirigió a los centros turísticos del país para la venta directa de sus productos artesanales como vendedores ambulantes (García, 2004: 68). Este nicho económico, soslayado por los mestizos, había sido poco explotado hasta entonces por el sector turístico nacional.

Los artesanos del Alto Balsas, principalmente los pintores de amate de los pueblos de Xalitla, San Agustín Oapan, Ameyaltepec, Ahuehuepan, Maxela y los productores de hamacas provenientes de Copalillo, desarrollaron en sus inicios una movilidad circunscrita a las ciudades y centros turísticos del propio estado y regiones circunvecinas: Acapulco, Taxco, Iguala, Chilpancingo, Ixtapa-Zihuatanejo, Cuernavaca y la ciudad de México fueron sus primeros circuitos migratorios (García, 2006: 4; Good y Barrientos, 2004: 11); la creación de su propio mercado artesanal se expandió a lugares turísticos de las costas tanto del Pacífico como del Caribe, así como a las ciudades turísticas del interior en todo el territorio nacional. En la actualidad, en más de cincuenta puntos de la República Mexicana se puede ubicar la presencia de los comerciantes nahuas de Guerrero, quienes cuentan con sólidas redes migratorias en las principales capitales y centros turísticos del país (García, 2003: 3; 2004: 71).

En los años ochenta, la artesanía ya era un complemento fundamental de la economía familiar y, en ocasiones, la única fuente de ingreso (García, 2006: 5). No obstante, después de este periodo de relativa bonanza, la contracción del mercado interno tuvo como consecuencia el desplome dramático en sus ganancias (Good y Barrientos, 2004: 17). A pesar de ello, las ventajas del comercio ambulante de artesanías pueden apreciarse cuando se considera la situación de otros pueblos vecinos que carecen del beneficio de la producción y comercio de artesanías y que continúan insertos en redes de movilidad agrícolas (*Ibid.*: 18). Los mixtecos y tlapanecos se sumaron a los nahuas del Alto Balsas en el comercio ambulante para el sector turístico, desarrollando a la par sus propios productos, nichos de mercado y redes de movilidad.

Ante la crisis actual del mercado artesanal, también los nahuas del Alto Balsas redireccionaron sus flujos migratorios hacia otros mercados de trabajo nacionales y estadounidenses, reactivando los circuitos migratorios formados por sus paisanos desde la época del “Programa Bracero” (García, 2006: 5). Aun así, las ventajas de la diferencia en el mercado

artesanal lo representan un selecto grupo de artistas de la región, que por la calidad de sus temáticas y diseños —asociada a una cierta visión política de su entorno— son reconocidos internacionalmente en el mercado del arte popular, por lo que sus exposiciones han sido presentadas tanto en Europa como en Estados Unidos y son viajeros frecuentes de American Airlines en su condición de artistas y comerciantes en la Unión Americana (García, 2006: 2).

Redes de movilidad internacional

Cada región del estado de Guerrero: Norte, Centro, Montaña —incluso cada municipio y localidad particular— registra patrones de movilidad distintos hacia Estados Unidos, lo que ha ido diferenciando las particularidades de sus nichos migratorios. Por ejemplo, la región de La Montaña, situada en la zona de influencia mixteca y con una extensa interrelación sociocultural y económica con los municipios colindantes de la Mixteca oaxaqueña y poblana, dirige el grueso de su flujo migratorio hacia la costa este de Estados Unidos, principalmente hacia Nueva York, donde el circuito migratorio de los poblanos y oaxaqueños se había iniciado desde 1960 (Durand y Massey, 2003: 130). A su vez, desde Nueva York, las redes de movilidad han llevado a los montañeros hacia Virginia, Tenesee y Florida (Canabal y Barroso, 2005: 17; Centro Tlachinollan, 2006). En el caso de los nahuas del norte de Guerrero, Chicago es su principal enclave migratorio —junto con Los Ángeles y Houston— y sus redes de movilidad se ensanchan hacia Carolina del Norte (González, 2003: 3; García, 2006: 10).

La estructura por edad y sexo de la población emigrante con destino a Estados Unidos permite observar el carácter selectivo del proceso migratorio. La mayor proporción de migrantes —60.8%— la conforman jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 44% son hombres y 16.8% mujeres (INEGI, 2005a: 51 y 54).

Si bien la migración indígena procedente de Guerrero hacia Estados Unidos tiene en algunos pueblos del Alto Balsas y de la región de La Montaña el antecedente de su incorporación en el Programa Bracero hacia la década de los cincuenta (Good, 1988: 185; Cruz y Ferias, 2004: 78), la mayor parte de las corrientes migratorias internacionales es más reciente —segunda mitad de la década de los ochenta y principios de los noventa— y es alentada por las relaciones de parentesco, compadrazgo y vecindad con indígenas de municipios colindantes del propio estado o del sur de Puebla y Occidente de Oaxaca, quienes ya contaban con una mayor tradición migratoria internacional.

Uno de los efectos de esta incorporación reciente a las corrientes migratorias internacionales fue que la mayor parte de la población indígena procedente de Guerrero no pudo acogerse a los beneficios de La Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés, la ley de amnistía promulgada en 1986 que legalizó a 2.7 millones de trabajadores indocumentados), por lo que en su caso, el grueso de la migración continúa siendo indocumentada, lo que ha tenido por consecuencia que amplíe su estancia en los lugares de destino, difiera su retorno y se establezca en los lugares de atracción.

Otro de los efectos de la ley de inmigración promovida por el IRCA y que ha tenido consecuencias para este flujo migratorio reciente, es que esta normativa, al establecer penas civiles y judiciales a los patrones que contrataran a cualquier persona extranjera no autorizada para trabajar, propició la creación de subterfugios legales como la subcontratación de empleados, ante la eventualidad de cualquier litigio o multa por la contratación de indocumentados (Durand y Massey, 2003: 176). Consecuencia de esta evasiva legal por parte de las empresas, es que aquellos migrantes que laboran a través de los mecanismos de subcontratación, perciben un monto salarial menor, por lo que los subcontratistas se quedan con una porción del mismo como comisión. Éste es uno más de los mecanismos de explotación de los trabajadores indocumentados que afectó en buena medida al nuevo relevo migratorio y que incluyó a las corrientes de población indígena provenientes de Guerrero que trabajan como asalariados a través de las oficinas de subcontratación.

En relación a la actividad laboral en los lugares de destino, el primer flujo migratorio indígena —el vinculado al Programa Bracero— favoreció la continuidad de su actividad laboral en el sector primario de la economía, rasgo perceptible en los primeros circuitos migratorios de los municipios indígenas, cuya migración se remonta a la década de los cincuenta; en contraste, el nuevo relevo migratorio —surgido a partir de los años ochenta— se caracteriza por su concentración en las zonas metropolitanas de unas cuantas ciudades globales, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde la actividad laboral indígena se desarrolla en el sector secundario y terciario de la economía. Estas ciudades, al concentrar información y comunicar las novedades sobre mercados de trabajo emergentes, operan como cabeza de puente, lo que posibilita una gran movilidad hacia nuevos polos de atracción tanto rurales como urbanos.

Entre estos flujos migratorios, no está clara la proporción de migrantes indígenas procedentes de

Guerrero que continúan vinculados a la agricultura, pero se reconoce que este sector se nutre cíclicamente de las redes de movilidad indígena transfronteriza que siguen el ritmo de las cosechas en los corredores agrícolas del Pacífico, el Centro y la Costa este de Estados Unidos (Douglas y Massey, 2003: 125). Hoy en día, cerca del 80% de la mano de obra en la agricultura norteamericana procede de México y de ésta, un 3.8% es calculada como originaria del estado de Guerrero (Runsten *et al.*, 2000: 17; Fox, 2005: 38).

En Estados Unidos, las condiciones de empleo de los indígenas son similares a los de sus paisanos mestizos, ya que ambos grupos de migrantes ganan como promedio mensual poco más de mil dólares (1 075 dólares), lo que contrasta mucho con las diferencias que se observan entre ambos grupos en México (Conapo, 2001: 9). No obstante, este ingreso sitúa tanto a indígenas como mestizos por debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos, condición difícil de superar debido a los bajos niveles de escolaridad que definen su estatus ocupacional y sus bajos salarios.

De las redes de movilidad a la migración definitiva

Desde la década de los sesenta, el saldo neto migratorio del estado de Guerrero ha sido negativo. Actualmente el estado ocupa el sexto lugar entre las entidades con mayor saldo neto migratorio negativo, con 16.1% de su población fuera de la entidad (INEGI, 2005a: 23), lo que suma, en 2005, poco menos de 78 mil personas durante los últimos cinco años (INEGI, 2006a).

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) (Tuirán, 2001: 87), la franja norte del estado de Guerrero y la región mixteca que comparten los estados de Guerrero y Oaxaca —junto con el sur de Morelos, el sur del estado de México y el sureste de Puebla—, conformaron un corredor con una intensidad migratoria tan alta como la que se observa en el corazón de la región expulsora tradicional del país, es decir, el occidente de México. Este relevo migratorio fue nutrido por un amplio contingente de municipios indígenas o con alta concentración indígena.

Entre los municipios indígenas, la más alta pérdida de población se registra en Tlapa de Comonfort, Alcozauca de Guerrero, Zitlala, Metlatónoc, Copanatoyac y Xochistlahuaca, con rangos que van del 11.4 al 6.5% de pérdida de población (INEGI, 2005a: 26 y 381). La principal causa de la emigración entre los municipios indígenas en éxodo como Metlatónoc, Alcozauca de Guerrero, Xochistlahuaca y Xalpatláhuac es de carácter laboral en busca de fuentes de ingreso

y de empleo, siendo excepción el municipio de Copanatoyac, que aduce razones familiares como principal razón para emigrar (INEGI, 2005: 29 y 378).

La migración interna

En el quinquenio 2000-2005, la migración interna de la entidad se dirigió fundamentalmente hacia la zona Centro, la zona fronteriza y algunos estados de la región Pacífico. En la zona Centro, las corrientes migratorias se dirigieron a Morelos (14.8%) y a la Zona Metropolitana de la ciudad de México: al Estado de México (11.6%) y al Distrito Federal (8.9%); en la Frontera Norte, el flujo migratorio se dirigió principalmente a Baja California (9.7%) y Baja California Sur (7.9%), y en el Pacífico, los guerrerenses se dirigieron a estados con importantes mercados de agricultura intensiva, como Michoacán (8.3%) y Sinaloa (7.6%) (INEGI, 2006a). Entre la población indígena de la entidad, el patrón migratorio registrado en 2000 es muy similar a las tendencias generales referidas, destacando también su articulación étnico-geográfica con el estado de Oaxaca, importante destino migratorio de la población indígena de los municipios de la región de La Montaña (INEGI, 2000).

El flujo migratorio hacia el centro del país continúa siendo el de mayor peso, pero su fuerza de atracción ha disminuido —en 1970, el 81% de la emigración de la entidad se dirigía a la zona Centro, en 1990, su proporción disminuyó a un 46.6 por ciento y en 2005 descendió a un 35.3 por ciento (Chávez, 1998: 252; INEGI, 2006)—; a su vez, la migración interna hacia las zonas fronterizas y hacia ciertos estados del occidente es un fenómeno emergente relativamente reciente (1980) que ha mantenido cifras constantes a lo largo de varios quinquenios (1995, 2000 y 2005), como es el caso de la migración al estado de Michoacán, con porcentajes de entre 8 y 9.5% y al estado de Sinaloa, con porcentajes de entre 6.1 y 7.8 para los mismos periodos (INEGI: 1995, 2000 y 2006).

La estructura ocupacional de la población indígena en los enclaves migratorios presenta variaciones que reflejan las propias especializaciones productivas regionales y el periodo en que ha ocurrido la migración (Chávez, 1999: 210). A partir de la década de los cincuenta, en el marco de la transformación productiva que en los años cuarenta experimentó gran parte del país, un amplio contingente indígena siguió las pautas de migración de la población general hacia las grandes ciudades y sus zonas metropolitanas, donde se ocupó en sectores de baja calificación: los hombres se emplearon en los servicios no especializados (cargadores, macheteros, mozos) y en la indus-

tria de la construcción; las mujeres se incorporaron al servicio doméstico y al comercio ambulante. La zona metropolitana de la ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y Chilpancingo fueron las principales ciudades receptoras de la población indígena del estado (Rubio *et al.*, 2000: 39).

En la década de los sesenta, los indígenas guerrerenses que continuaban anclados a sus comunidades de origen, mantenían un flujo migratorio cíclico a los municipios de producción cafetalera del propio estado: Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Petatlán; a las zonas cañeras de Veracruz y Morelos y a la región jitomatera de los Altos de Morelos. Durante la década de los setenta, la migración cíclica se extendió a los mercados de agricultura intensiva del noroeste del país: Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California, consolidándose como la red de movilidad interna más importante para la población indígena (*Idem.*).

En los años ochenta, la diversificación de las actividades económicas propició la aparición de nuevos polos de atracción y, con ello, hubo cambios en la distribución espacial de las corrientes migratorias, lo que las hizo más diversas y complejas, ya que al tradicional traslado a las zonas de agricultura intensiva y a las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, se sumó una importante migración a ciudades fronterizas como Ensenada, Mexicali y Tijuana, y a puertos como Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz, Cancún, Playa del Carmen y otras zonas turísticas del interior. En la frontera, los migrantes indígenas se benefician tanto de la agricultura intensiva transfronteriza como de la venta ambulante, el comercio de artesanías y el trabajo en la industria de la construcción (*Ibid.*, 74); en los puertos, se consolida un comercio ambulante en la zona de playa y alrededores dirigida al sector turístico, desarrollando también los oficios que les han caracterizado en otras regiones.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, como resultado del modelo de desarrollo basado en la importación de bienes y servicios, se contrajo el mercado de trabajo interno y los indígenas —como el resto de los habitantes del país— orientaron la dirección de su flujo migratorio hacia los mercados internacionales, donde podían desempeñar labores tanto en el sector primario como en el secundario y terciario (Durand y Massey, 2003: 86).

La migración internacional

Según estimaciones de Conapo (2000), la mayoría de los municipios indígenas y con alta concentración indígena del estado de Guerrero reporta entre

el 0.08 y el 4.22% de hogares con emigrantes en Estados Unidos en el quinquenio anterior. De ello se infiere que el peso relativo de los hogares con emigrantes hacia Estados Unidos procedentes de municipios indígenas o con alta concentración indígena del estado de Guerrero todavía es bajo, comparado con la población general —menor al 0.5% en todos los municipios indígenas—, a excepción de los municipios de Atlixac y Xalpatláhuac con 0.8% y Tlapa de Comonfort con 1.4%. Otros municipios con presencia indígena y alta intensidad migratoria son Tepcoacuico de Trujano con 1.6% y Eduardo Neri con 1.4% (INEGI, 2005a: 385).

El bajo índice de migración internacional se refleja también en que menos del cinco por ciento de los hogares de los municipios indígenas eran receptores de remesas internacionales en 1995, descontando los municipios de Atlixac, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac, donde entre el 6 y el 8% de los hogares recibían recursos por esta vía (Conapo, 2000).

Si bien la migración guerrerense con destino a Estados Unidos presenta un bajo porcentaje de migrantes de retorno —migra apenas el 9.2% de la población, en contraste con el 90.8% restante que continúa residiendo en ese país (INEGI, 2005: 55)—, la mayor participación indígena en la migración internacional durante el último lustro (2000-2005) se puede inferir, aunque de manera indirecta, por el hecho de que el 90% de los municipios indígenas o municipios con alta concentración indígena de la entidad registraron en 2005 migrantes de retorno procedentes de Estados Unidos, contra un 37% detectado en 2000 (elaboración propia con base en estimaciones de Conapo, 2000 y datos del INEGI, 2006).

En el quinquenio 2000-2005, prácticamente sólo en dos de los veinte municipios indígenas o con alta concentración indígena no se registró población que haya retornado del exterior del país: Iliatenco y Tlacoapa; en nueve municipios se contabilizan menos de diez retornados y en los nueve restantes, más de diez personas dijeron haber vivido en Estados Unidos en el año 2000. Entre los municipios con mayor proporción de migrantes de retorno procedentes de Estados Unidos destacan Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Mártir de Cuilapan y Atlixac, con 89, 40, 35 y 34 retornados respectivamente (INEGI, 2006). Esta tendencia concuerda con la intensidad migratoria registrada en el quinquenio 1995-2000, en el que tres de estos municipios (Tlapa, Xalpatláhuac y Atlixac) fueron los únicos con un grado de intensidad migratoria media, mientras que el resto de municipios indígenas tenían una intensidad migratoria baja o muy baja (Conapo, 2000).

Llama la atención que municipios como Atlamajalcingo del Monte y Metlatónoc, que en el año 2000 no registraban población emigrante con destino a Estados Unidos en el quinquenio anterior ni migrantes de retorno (INEGI, 2005:387), en 2005 reportan 3 y 14 migrantes de retorno respectivamente. En el caso del municipio de Metlatónoc, a esta última cifra se podrían sumar los once migrantes de retorno registrados en Cochoapa el Grande, municipio creado en 2005 a partir de la escisión del municipio de Metlatónoc y considerado actualmente el municipio de menor Índice de Desarrollo Humano del país (INEGI, 2006b; Ramos, 2006).

Estos datos sugieren que los hogares de los municipios indígenas con alta marginalidad, intentan superar las restricciones económicas, el riesgo y la escasa red social que limitaban su incorporación a los mercados laborales internacionales; que la mayor parte de los migrantes internacionales es joven y que la tendencia es a la emigración permanente y al cambio definitivo de residencia.

Los nuevos espacios de reproducción social

Para la población indígena de Guerrero, la búsqueda de nuevos espacios de reproducción social es un proceso dinámico que aún no se agota en sus posibilidades, incluso entre aquellas comunidades que ya han trasladado contingentes importantes de residentes “permanentes” a sus nuevos nichos migratorios —megaciudades, zonas turísticas, regiones fronterizas, colonias de avecindados en los márgenes de las zonas de agricultura de riego, migrantes en condados y grandes ciudades de Estados Unidos— pues no cancelan la posibilidad de adopción de nuevos patrones de movilidad, conscientes de que el sector capitalista contrae, moviliza o transfiere mercados de trabajo permanentemente.

Los destinos migratorios están estrechamente relacionados con las trayectorias de movilidad construidas en los últimos cincuenta años, lo que propicia un patrón selectivo de los espacios sociales y territoriales en los que podía cristalizar un nuevo espacio de reproducción social (Rubio *et al.*, 2000: 25). En efecto, la itinerancia a que obligaron las redes de movilidad permitió a individuos, familias y comunidades enteras percatarse de las posibles ventajas comparativas que su anclaje en los lugares de trayecto o destino les acarrearían: mayor permanencia en el mercado laboral, mayor posibilidad de obtener ingresos económicos y mayores posibilidades de ahorro, lo que implicaba menos gastos en transporte, comunicación y transferencias económicas a la familia en el lugar

de origen. Por consiguiente, fueron estas redes de movilidad el prelude de la fundación de los nuevos espacios de reproducción social.

Todavía no hay una masa crítica de estudios de caso que permita distinguir, más allá de ciertas generalizaciones, cuáles son las experiencias comunes y las singularidades en la construcción de nuevos espacios de reproducción social de las comunidades indígenas de Guerrero. En los estudios actuales, contrario a la suposición general de que los indígenas están condenados a la marginación económica, a la explotación y a la aculturación sin más en sus nuevos emplazamientos, se advierte que, ahí donde el carácter comunitario y concentrado de la migración está presente, una vez resueltas las necesidades ingentes, se establecen nuevos arreglos para mantener su sentido de pertenencia y sus referentes identitarios, cristalizando dichos arreglos en dispositivos de organización colectiva para estructurar su vida social y comunitaria en los nuevos lugares de asentamiento y/o en las comunidades de origen.

Estos espacios y formas de participación a escala, atenúan los efectos excluyentes inherentes a los procesos de globalización, tanto en los espacios nacionales como en los internacionales. A pesar de ello, no en todos los casos dichos dispositivos son suficientes para paliar la desestructuración del tejido social comunitario.

Entre los trabajos precursores sobre los nuevos espacios de reproducción social construidos por los indígenas guerrerenses a nivel nacional e internacional se encuentran los de Barroso *et al.* (2003), Canabal *et al.* (2005), el Centro Tlachinollan (2005), Díaz (2003), García (2004), González (2003), Sánchez (2000) y Villela (2007). Estos estudios empiezan a reflejar tanto las condiciones de vida y de trabajo, como el entramado social en estos nuevos enclaves migratorios, y de algún modo, son representativos de los asentamientos generados en las diferentes olas migratorias nacionales e internacionales.

Presencia nahua de Guerrero en la Zona Metropolitana del Distrito Federal

La ciudad de México recibió grandes contingentes de emigrantes indígenas desde la década de los cincuenta. Entre ellos, el pueblo nahua de Acatlán hizo de la zona conurbada de la ciudad de México su principal destino migratorio. En la gran urbe, los acatecos lograron posicionarse en un nicho laboral relegado por otros: el de barrendero en el Departamento de Limpia del Distrito Federal. Rosalba Díaz (2003) realiza un sugerente estudio et-

nográfico sobre los rituales de petición de lluvia en el pueblo de Acatlán y a través de la vida ceremonial del pueblo, da cuenta de los diversos cambios ocurridos en la comunidad en los que incorpora algunos que son resultado del proceso migratorio.

La migración en Acatlán se intensificó a comienzos de 1970 con el declive de la producción de maíz y garbanzo, la baja productividad de las tierras de temporal y la lenta recuperación agraria de las tierras comunales de riego que estaban en litigio (Díaz, 2003: 55). La migración acateca tuvo dos vertientes, la de carácter temporal y la definitiva; la primera, con destino rural, se orientó a la cosecha de cultivos comerciales como el chile o el jitomate en Nayarit o de café en la sierra de Atoyac (*Ibid.*: 45). La migración definitiva tuvo como principal destino la Zona Metropolitana del Distrito Federal, donde llegaron a radicar cerca de 300 familias acatecas en colonias conurbadas de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México; otros destinos migratorios han sido ciudades y poblaciones del interior del propio estado de Guerrero, como Acapulco, Ayutla, Tecuanapa, San Marcos, Cruz Grande, Las Vigas, Chilpancingo, Chilapa, Copalillo y Tlapa, donde residen cerca de 1 000 acatecos, dedicados fundamentalmente al comercio de velas o de mercancías industrializadas. En ambos casos, los migrantes conservan en el pueblo viviendas y parcelas y visitan con frecuencia a sus familiares (*Ibid.*: 38).

En la ciudad de México, la actividad económica principal de los migrantes acatecos es el trabajo asalariado en el servicio de limpia del Gobierno del Distrito Federal:

Los primeros migrantes se colocaron como barrenderos y jardineros y con los años "ascendieron" a choferes de camiones de basura, dejando para los recién llegados sus anteriores puestos. Otros más se colocaron como estibadores en La Merced y la Central de Abastos y, en pocos casos, como obreros. Los acatecos también son comerciantes ambulantes, básicamente dedicados a la venta de flores y artesanías. Los hijos de la segunda generación de migrantes se insertaron en los empleos de sus padres combinándolos, en algunos casos, con estudios técnicos y profesionales, por lo que existen médicos, lingüistas, contadores, administradores, antropólogos, técnicos en informática... (Díaz, 2003: 57).

Los vínculos económicos y sociales que los acatecos mantienen con su comunidad se manifiestan de diferentes formas. Desde su presencia y participa-

La Montaña en Nueva York

Mario Patrón y Abel Barrera*

En la alforja de cada joven de La Montaña que logra la hazaña de cruzar el muro fronterizo de Estados Unidos van cifradas las esperanzas de padres, hermanos e hijos que con gran angustia y expectación esperan el día bendito en que por primera vez en sus vidas aparezca el nombre de algún familiar en un banco o casa de cambio para recibir la remesa milagrosa que aliviará momentáneamente la pesada carga del hambre y la enfermedad.

En lugar de la Quinta Avenida, para los que vivimos en La Montaña es más importante y famosa la avenida 96 de Manhattan, porque ahí radican los pilares de la economía montañera. No se trata de corporativos o consorcios, sino de hombres y mujeres del campo dispuestos a aprender todos los oficios que sean necesarios con tal de percibir un sueldo.

Aprisionados en los rascacielos, tratan de hacer llevadera la vida, compartiendo un baño, una sala, una recámara y una cocina entre 15 o 20 personas. Es el hacinamiento un modo de vida obligado para los pobres en el primer mundo.

Desde las seis de la mañana inicia el suplicio y el trajín para esperar en las esquinas la llegada de contratistas y enrolarse como trabajadores de la construcción. Son trabajos eventuales en los que llegan a ganar ocho dólares la hora. Las marketas o fábricas de ropa, propiedad de los coreanos, son trabajos forzados de los que semanalmente sacan 240 dólares. El *lonche* o *itacate* es imprescindible porque no se pueden dar el lujo de comer en un restaurante. El regreso por la noche al departamento es para cenar, bañarse y dormir. El fin de semana lo destinan básicamente para lavar la ropa, comprar la despensa semanal, las cervezas, hablar por teléfono, jugar fútbol, “chelear”, ir a la iglesia o dormir.

A pesar de las adversidades y los sinsabores, sigue creciendo el número de condominios ocupados por jóvenes de La Montaña y la Cañada en los alrededores de la Avenida 96. La Avenida 37 del condado de Queens es otra zona habitada también por guerrerenses de La Montaña y la Cañada que comparten trabajo, espacios habitacionales, lugares de esparcimiento y fiestas religiosas con familias poblanas pertenecientes a municipios que colindan con nuestro estado.

La población mixteca del municipio de Metlatónoc ha demostrado gran capacidad para vencer las barreras étnicas, lingüísticas, políticas y económicas que a lo largo de los siglos les ha impuesto el Estado nacional. Para ellos y ellas no hay camino por el que no se pueda transitar ni distancia que no logren reco-

rrer. Vencieron el aislamiento secular sin necesidad de que los gobiernos les construyeran carreteras, abrieron, desde la época prehispánica, rutas comerciales que comunicaban el Altiplano con el Pacífico, poblaron poco a poco la ciudad de Tlapa, los campos agrícolas de Morelos, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Baja California para irse asentando en ciudades fronterizas y formar algunas colonias, como el caso de varias familias de Huexoapa que viven en Tijuana. La frontera no ha sido un impedimento para librarla y continuar su marcha hacia el Norte.

Es admirable su tenacidad y su capacidad de adaptación a medios difíciles y hostiles. Actualmente, varias familias de mixtecos pertenecientes a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc han logrado instalarse en el estado de Virginia para enrolarse como trabajadores de la empresa cigarrera Marlboro y de las sopas instantáneas Maruchan. A pesar del monolingüismo de varias mujeres de Calpanapa y Joya Real, han aprendido a empaquetar y a saber desplazarse a sus centros de trabajo en horarios nocturnos. En medio del idioma inglés se mantiene viva su lengua florida; sus hijos, que empiezan a ingresar a las escuelas públicas, serán los primeros que aprenderán como lengua de instrucción el inglés, guardando para la casa la lengua de los hijos e hijas de la lluvia.

Las iglesias católica y evangélica se han transformado en varios estados donde hay una gran afluencia de migrantes en espacios solidarios que brindan atención médica, alojamiento, alimentación y orientación para conseguir algún trabajo.

Ahí, muchas familias han reorientado su vida, varios se han convertido a otros credos religiosos y otros más se han integrado a la vida parroquial, para formar parte de algunos grupos de evangelización que buscan rescatar los valores culturales de la religiosidad popular.

Una experiencia interesante es la que han vivido varias familias de migrantes de La Montaña y la Cañada que radican en la zona conocida como la Corona, dentro del condado de Queens, en la iglesia de la Señora de los Dolores. En esa parroquia se reúnen guerrerenses y poblanos para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el domingo más cercano al 12 de diciembre.

“Al llegar a Nueva York, uno experimenta muy fuertemente la soledad, como que no existes. Por eso buscamos siempre refugiarnos en algo o en alguien. Muchos compañeros se entregan a los vicios y ahí se pierden. Otros hemos logrado reaccionar y nos hemos refugiado en la iglesia católica”, comenta con orgullo don Genaro Sánchez, tlapaneco radicado en Nueva York desde hace más de 15 años, y miembro prominente del comité organizador de la fiesta de la virgen.

* Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, publicado en *El Sur de Aca-pulco*, jueves 28 de diciembre de 2006.

Su compromiso es llevar durante todo el año a la virgen de Guadalupe a los hogares guerrerenses de Queens y conseguir a los patrocinadores de la fiesta. Fieles a la tradición montañera, se trata de tirar la casa por la ventana. El gusto refinado, aprendido por algunos jóvenes que trabajan en las florerías de Nueva York, sale a relucir en el altar dedicado a la virgen, que tiene un costo aproximado de cuatro mil dólares. El mariachi es la mejor compañía para la velada del sábado. Con su música se hermana a los guerrerenses y poblanos pero también aflora la nostalgia y las ganas de volver a casa, porque el frío de la soledad, la discriminación y la inseguridad laboral cala muy hondo. Mil dólares por cada hora del mariachi es el precio que pagan para su reencuentro con la música que estremece sus corazones. La virgen de Guadalupe es el símbolo que convoca y moviliza; la que realiza el milagro de juntar muchos dólares para llevar hasta su parroquia a un sacerdote desde la ciudad de México; para contratar a un maestro de danza regional que prepare varios bailables el día de la virgen; para comprar en México todo el vestuario que necesitan los jóvenes bailarines para que luzcan con orgullo los atuendos originales y para compartir en la fiesta

guadalupana los tamales, el atole, los tacos y el pozole, al puro estilo guerrerense.

Más de ocho mil guerrerenses y poblanos llegan a la iglesia de la Señora de los Dolores a cantarle a la virgen, a disfrutar de la música del mariachi, a admirar el altar de la virgen tapizado de arreglos florales y a contemplar en pantalla gigante la serenata mexicana de cinco horas.

Los momentos densos en la vida de los migrantes de Nueva York pasan necesariamente por esta experiencia religiosa comunitaria que recrea la comunidad de origen, revitaliza los lazos étnicos y reivindica nuestras historias y nuestras identidades. Es la parte luminosa que dignifica, engrandece y da sentido a una vida marcada por el sufrimiento y el desprecio.

La lucha por tener un lugar y un nombre en esta gran urbe que cosifica y mercantiliza, se da en todos los espacios y frentes. Algunos jóvenes de La Montaña se han aglutinado en las bandas de “los traviesos” y los “vatos locos” para hacer frente a las agresiones de las corporaciones policiacas y a la violencia de las otras bandas. Se organizan para sobrevivir en las calles, para resistir en el asfalto y para nunca claudicar en su lucha por alcanzar un trabajo que los dignifique. ■

ción económica y ceremonial en las fiestas del pueblo —las de petición de lluvias, la del Santo Patrono San Juan Bautista y la de Todos Santos— en que se organizan conjuntamente para regresar a la comunidad, asumir mayordomías y cooperar con los gastos y organización para el mejor engalanamiento de la fiesta, hasta las gestiones que como Comité Ejecutivo de Migrantes realizan en defensa de los bienes comunales tanto para la resolución de litigios por tierras en conflicto como en la propia elaboración de los estatutos comunales (Díaz, 2003: 58).

Díaz analiza el encuentro que en el ámbito festivo se da entre migrantes y locales en la comunidad de origen y que confronta dos alternativas de vida distintas:

Los hombres jóvenes de la comunidad acostumbra por las noches, reunirse después de sus labores en las esquinas del pueblo para platicar, fumar o “tomar un mezcalito”, pero en época de fiesta este espacio es ocupado por los jóvenes migrantes para escuchar música de rock y tomar cerveza. Estos jóvenes se diferencian de los habitantes del pueblo por sus ropas y peinados, algunos de estilo “punk” y en la forma de agruparse en las esquinas, haciendo notar, con sus actitudes y atuendo, su experiencia de ciudadanos... (Díaz, 2003: 113).

La tensión, confrontación y competencia surgida entre acatecos migrantes y locales encuentra su desfo-

que en el marco del contexto ritual de la ceremonia de petición de lluvias: la pelea de tigres o tecuanis, cuyo sentido original es propiciar la lluvia a través de la magnitud e intensidad de la contienda (*Ibid.*: 116). Para el evento, quienes provienen de Ciudad Nezahualcóyotl han adaptado, como señal de distinción, los overoles naranjas del servicio de limpia del gobierno del Distrito Federal que son la base para confeccionar sus trajes de tigre; por su parte, los migrantes provenientes de la costa portan trajes de color amarillo con franjas negras y algunas figuras de animales o letras, mientras que los jóvenes que viven en Acatlán continúan usando el traje “tradicional”. Estas variantes hacen que el anonimato se pierda entre contrincantes y que las diferentes procedencias sean en sí un acicate más para la pelea, resuelta en último término en el marco de la ritualidad inherente a la fiesta (*Ibid.*: 118-122).

Los acatecos también recrean parte de su cultura en la gran urbe, por ejemplo, extendiendo las peleas de tigres y danzas de su pueblo en un andamiaje ceremonial trasladado a la ciudad. Por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl celebran “la Octava” del Santo Patrón del pueblo (*Ibid.*: 70). En síntesis, los acatecos en la capital son un ejemplo más de los estrechos vínculos y lealtades que muchos indígenas mantienen con sus comunidades de origen, a la vez que en la ciudad consolidan nichos laborales y espaciales propios, donde recrean parte de su cultura en el lugar de destino.

De la migración cíclica a la definitiva: mixtecos y tlapanecos en Tenextepango, Morelos

Las corrientes de migración indígena procedentes del estado de Guerrero que se dirigen a Morelos se han orientado a los mercados estacionales de trabajo rural, principalmente a la zona jitomatera de los Altos de Morelos, a la ejotera del oriente y a la cañera del centro y poniente de la entidad, así como a las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, donde se dedican fundamentalmente a la venta ambulante de artesanías para el sector turístico y de golosinas para el transeúnte.

En los Altos de Morelos, la presencia de indígenas migrantes procedentes de Guerrero que se han acercado es manifiesta en municipios como Yecapixtla (localidad Juan Morales) y Tlayacapan (Nacantongo y El Golán); en el poniente del estado se localizan asentamientos en las inmediaciones de lo que fue el campamento cañero de Chiconcuac en el municipio de Xochitepec, mientras que en el oriente de la entidad, su presencia es significativa en los municipios de Cuautla (ciudad), Ayala (Tenextepango) y Tlaltizapán (inmediaciones del campamento cañero de Acamilpa). En algunos de estos municipios es más representativa la población inmigrante indígena de origen mixteco y tlapaneco que la nahua originaria de Morelos, como sucede en los municipios de Ayala, Tlayacapan, Totolapan y Yecapixtla (Enciclopedia de los Municipios de México, 2005; INEGI, 2006).

Tenextepango es un pueblo mestizo del municipio de Ayala, de importancia estratégica en la producción de ejote y otros productos hortícolas que genera un mercado estacional para 2 500 a 3 000 jornaleros (Sánchez, 2000: 139). En el radio de influencia de esta localidad se concentra el mayor número de asentamientos de población indígena migrante procedente de Guerrero en todo el estado de Morelos.

En 2005 se registraron 1 662 indígenas establecidos en el municipio de Ayala: 421 hablantes de una lengua indígena (HLI) asentados en Tenextepango y 1 241 HLI acercados en colonias y ejidos adyacentes: San Pedro Apatlaco (207), La Longaniza (200), Constancio Farfán (127), Ejido Nueva Olinitepec (75), Xalostoc (58), Olinitepec (52) y 370 migrantes más, dispersos en otras localidades circunvecinas (INEGI, 2006).

Sánchez (2000: 139) estudió el carácter cíclico de esta migración temporal, en la que el ochenta por ciento de los jornaleros migrantes provenían de una veintena de comunidades pertenecientes a seis municipios de la región de La Montaña: Atlixnac, Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Copanatoyac,

Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte. Algunos de estos migrantes indígenas terminaron por asentarse definitivamente en las comunidades morelenses. Esta población acercada, señala Sánchez, constituye actualmente parte de la mano de obra local que satisface las necesidades de la actividad hortícola durante todo el ciclo anual, aunque algunos han empezado a diversificar sus actividades:

La principal actividad de estos trabajadores durante todo el año es el peonaje u otras actividades auxiliares de escasa calificación (por ejemplo macheteros); otros miembros de la familia sólo trabajan de jornaleros en el periodo de cosecha, aunque algunas mujeres también trabajan como empleadas domésticas y otros servicios en Tenextepango, Villa de Ayala y Cuautla (ayudantes de cocina y limpieza en fondas, por ejemplo). Algunas pocas familias inmigrantes han emprendido pequeños negocios comerciales en las colonias en que vive la mayoría de los trabajadores inmigrantes (Sánchez, 2000: 211).

De esta forma, el asentamiento de jornaleros en colonias aledañas a la zona ejotera de Morelos, ofrece a éstos ventajas frente a aquellos que migran estacionalmente. Ventajas, no sólo en cuanto a las oportunidades de empleo en los campos ejoteros de Morelos y en el levantamiento de otras cosechas como el elote, la calabacita, el tomate, jitomate o el pepino, sino también en el traslado a otras regiones hortícolas cercanas como el Valle de Mezquital en Hidalgo y el Estado de México (Rodríguez, 2006: 17). Por otra parte, el proceso de asentamiento amplía su opciones laborales a otros sectores productivos con mejores condiciones de trabajo en el sector secundario o terciario, laborando como albañiles, comerciantes y empleados (Martínez, 2005: 171); sin embargo, no se puede perder de vista que las ventajas comparativas en términos laborales de los indígenas jornaleros asentados, respecto a los indígenas jornaleros migrantes, termina siendo un estamento más del proceso de segmentación del mercado de trabajo regional que se suma a la secular asimetría entre mestizos e indios:

Los nativos (y demás grupos mestizos no autóctonos) se presentan como segmentos regionales de la sociedad nacional dominante, mientras que los miembros de grupos indígenas son parte de una minoría subordinada. Bajo tal carácter asimétrico, se produce una aceptación implícita de una jerarquía de estatus (o sistema de estratificación), que opera de modo paralelo al reconocimiento de una

estructura de clases del sistema social inclusivo, en la que la naturaleza de las relaciones entre mestizos e indios es de dominación y sujeción (Sánchez, 2005:11).

Así, los procesos de asentamiento indígena en las regiones circunvecinas a las zonas de agricultura intensiva contribuyen a lubricar el engranaje estructural de los mercados de trabajo agrícolas basados en la segmentación del mercado laboral, al promover la competencia por las fuentes de trabajo entre los indígenas asentados y los que son migrantes.

Martínez (2005: 139) realiza un estudio de caso en dos asentamientos de jornaleros migrantes en la periferia de Tenextepango, en el que destaca el perfil sociodemográfico de sus habitantes. Uno de los casos que esta autora reseña, es el de la colonia La Longaniza, “la colonia de los jornaleros guerrerenses”, fundada hacia 1997 a partir de la compra-venta de terrenos ejidales por los indígenas jornaleros. En 2005 habitaban en La Longaniza 468 personas en setenta y ocho viviendas, siendo que en el censo de 2000 se registraron apenas nueve viviendas con 59 habitantes, lo que confirma que es una colonia de reciente creación. El 80% de la población total de cinco años y más es hablante de una lengua indígena y entre la Población Económicamente Activa, la mayoría se ocupa como jornalero cortador de ejote en la región. La colonia no está pavimentada, no dispone de drenaje, de agua entubada ni de energía eléctrica y las viviendas son de paredes de tabique o adobe, techo de lámina de cartón y piso de tierra (*Idem.*).

Asentamientos indígenas similares a los que se observan en Morelos se han detectado desde finales de la década de los ochenta en las zonas de agricultura intensiva del norte del país (Velasco, 2000: 94). Lugares como La Choricera en Mexicali, El Control en Hermosillo, Las Pulgas en San Quintín y Villa Juárez en Sinaloa son casos paradigmáticos de ello (Lara, 2006a; Sedesol, 2006: 9). En estos sitios hay un porcentaje significativo de población migrante asentada procedente de Guerrero. Por ejemplo, en San Quintín, Baja California, 6% de los residentes en colonias son originarios de Guerrero, mientras que en los campamentos agrícolas de trabajadores temporales, se encontró que hasta un 30.4% de sus habitantes provenían de esa entidad manteniendo una ruta estacional (Anguiano, 2007:86).

Montañeros en Acapulco

Durante los años cincuenta, el desarrollo turístico de Acapulco atrajo una importante canti-

dad de mano de obra que fue empleada en la industria de la construcción; entre ella, un contingente de población mixteca procedente de Xalpatláhuac optó por su residencia permanente en el puerto.

Para mediados de los años ochenta, se detectan quince colonias en Acapulco habitadas por cerca de 3 000 “montañeros”, de los cuales un 70% proviene del municipio de Xalpatláhuac. Se trata de población asentada que realiza viajes esporádicos a sus lugares de origen para las fiestas, para cumplir con algún cargo o para sembrar (Canabal, 2001: 48; Canabal y Félix, 2004: 49).

Entre la población mixteca originaria de Xalpatláhuac, se ha destacado el perfil de la migración proveniente del pueblo de Tlaxco hacia la colonia La Chinameca, en Acapulco, lo que señala los contrastes entre las condiciones de vida en el lugar de origen y la ciudad turística (Barroso *et al.*, 2004: 3; Barroso y Canabal, 2006: 3).

En Tlaxco, las casas están construidas, en su mayoría, con materiales de la región: paredes de adobe, techos de teja y pisos de tierra apisonada. El 90% de hogares dispone de electricidad, el 9% cuenta con agua, y el drenaje es prácticamente inexistente. El traslado a la ciudad más cercana —Tlapa— ocupa dos horas en transporte de redilas, y si se quiere continuar la educación posprimaria hay que desplazarse a la ciudad. En la colonia La Chinameca, en el puerto turístico de Acapulco, dos terceras partes de las viviendas son de mampostería (piso, paredes y techo) y prácticamente todos sus habitantes cuentan con servicios básicos: agua, luz, drenaje. En cuanto a los aparatos domésticos, más del 75% cuentan con estufa y refrigerador, 100% con televisión y 46% con teléfono, mientras que en Tlaxco ninguno posee estufa o teléfono, sólo el 12% de los hogares cuenta con televisión y el 24% con refrigerador. En Tlaxco —sintetizan Barroso *et al.* (2004) — las condiciones materiales de vida son precarias, lo que aunado a la escasez de servicios educativos, de salud y de comunicación, impide el desarrollo de sus habitantes.

Respecto a las actividades productivas, en Tlaxco los hombres trabajaban en el campo, la ganadería menor y las artesanías de palma, teniendo como referente comercial y de servicios a la ciudad de Tlapa. La producción local es básicamente para el autoconsumo con pequeños excedentes para la venta. En la colonia acapulqueña de La Chinameca, el 61% de los padres se dedica a la venta ambulante, el 31% al trabajo de albañilería y el 8% son obreros. En el caso de las madres de familia, el 75% se desempeña como vendedoras ambulantes, el 19% son amas de

Mixtecos guerrerenses en Valle Verde, Tijuana

Gonzalo Mauro Montiel y Aguirre*

La migración es un fenómeno que representa la puesta en juego de varios factores a los que están asociados: la falta de empleo y de seguridad social, los cambios violentos en los ecosistemas (como erupciones de volcanes, terremotos, etcétera) y la esperanza de encontrar mejores niveles de bienestar, entre otros.

Es un fenómeno que refleja primordialmente la existencia de insatisfacciones económicas y sociales y las expectativas de mejorar el estatus. La migración siempre representa un riesgo y un gasto económico y los movimientos sociales manifestados en corrientes migratorias son un reflejo de las carencias en los lugares de origen, lugares que antaño fueron zonas de refugio, como diría Gonzalo Aguirre Beltrán, y ahora se han convertido en zonas de expulsión, por motivos de la injusticia y desigualdades que no alcanzamos entender y que no analizaremos en este artículo, pero que de alguna manera están señalados en sus aspectos más generales.

La migración indígena tiene connotaciones diferentes a las migraciones del resto de la población. Para una indígena, migrar representa, generalmente, movilizar a toda su familia; es un riesgo y un gasto económico abandonar las tierras de cultivo, su pueblo y sus familiares, que son parte de sus raíces y fundamento sustancial de su identidad, e integrarse a un esquema en donde es ubicado en la escala socioeconómicamente más baja, con enormes desventajas ante el resto de la población. Asimismo, abandonan sus tradiciones, las formas de organización social, cultural, política y económica que les han permitido subsistir como grupo diferenciado y se integran a un esquema basado en la individualidad. Los nuevos valores de la vida urbana o rural les son desconocidos, de ahí que su vida migratoria se inicie con enormes desventajas, principalmente la discriminación racial, en su propio país, no se diga en el extranjero.

El fenómeno de la migración indígena representa un reto tanto para los estudiosos como para los planificadores de la problemática indigenista. Para abordar este tema considero necesario hacer una serie de reflexiones y profundizaciones en torno a las estadísticas censales.

En primer lugar, es importante señalar que desde 1985 no se ha podido despejar la incógnita del volumen de población indígena. Los censos de esa fecha captaron a los hablantes de diferentes lenguas indígenas, mayores de cinco años de edad y, desde entonces, el criterio no ha cambiado, de tal forma que, con algunas variantes, tenemos 90 años de estadísticas incompletas de la población india.

Las estimaciones que se han realizado arrojan cifras que van entre los 10 y los 12 millones de miembros de poblaciones indígenas. Cualquiera que sea su magnitud, esta población es suficientemente grande para ser considerada en los planes y programas que se diseñan, tendientes a procurar el desarrollo y mejoramiento de la ciudad de las comunidades indias de México.

Migración indígena a Baja California

Sabemos que Baja California es uno de los estados a donde se dirige una gran cantidad de migrantes indígenas procedentes de otras entidades de la república, ¿a qué se debe esta situación?

Habría que matizar el concepto de “gran cantidad de migrantes indígenas”. En el contexto del flujo de migrantes que pasa por Baja California, los migrantes indígenas son una pequeña minoría. Un cálculo aproximado del número de indígenas que llegan a esa entidad al año para trabajar ahí o para seguir a Estados Unidos sería de entre 15 y 20 mil. Lo que pasa es que los migrantes indígenas son más conspicuos que los no indígenas, por su lenguaje, por su vestimenta o por sus patrones de agrupamiento. Bastan unos cuantos cientos de indígenas para que la gente que los detecta piense que son muchos más.

Pero ¿qué grupos indígenas y en qué cantidades llegan a Baja California? Los grupos mayoritarios de indígenas que llegan a Baja California son mixtecos, zapotecos y triquis de Oaxaca y mixtecos de Guerrero. Entonces ¿cuál es el carácter de la migración indígena a Baja California? Es decir, los indígenas que llegan a Baja California ¿se establecen aquí o sólo pasan en tránsito hacia Estados Unidos?, ¿hay proporciones significativas de indígenas que migren a trabajar en el estado o los que permanecen aquí lo hacen tan sólo por haber podido ingresar a territorio norteamericano?

La mayor parte de los migrantes indígenas vienen a Baja California, más que a Estados Unidos, como destino programado de su migración. En este estado se concentran en los campos agrícolas del poblado de San Quintín y Maneadero, del municipio de Ensenada, en los campos agrícolas del Valle de Mexicali, y otros se establecen en la ciudad de Tijuana.

Asimismo, con algunos familiares se dedican básicamente a las labores agrícolas de esta región costera que está en proceso de expansión gracias, en alguna medida, a la disponibilidad de la mano de obra de los migrantes indígenas. La proporción de migrantes indígenas que cruza a Estados Unidos se ha exagera-

* Director de Escuela Primaria Bilingüe: Véc Saa Kua'a.

do mucho en razón de su visibilidad en comparación con los no indígenas. Sin embargo, esa migración ha estado aumentando conforme esos migrantes logran establecer mecanismos de protección y de contratación laboral que apoyan el mantenimiento de redes de contactos que facilitan la migración. Hay que hacer notar que la migración, desde Oaxaca hasta California, es sumamente cara. Aproximadamente entre 20 y 25 mil pesos promedio por migrante, que incluyen transporte, alimentos, hospedaje, pago de coyotes, costo de espera hasta recibir los primeros salarios, etcétera. Éstos son costos nada accesibles para los migrantes indígenas, aunque ellos parecen ser más efectivos que los migrantes no indígenas en su organización para abaratarlos. Aun así, el costo de la migración, por persona, es crecientemente caro, pero no olvidemos que los indígenas son campesinos y muy buenos para caminar; ellos solos cruzan por el cerro y llegan a los campos agrícolas del condado norte de San Diego, California, y si consiguen reiteros llegan más allá de la Unión Americana.

El porvenir de nuestra cultura

Se ha dicho y se ha reconocido muchas veces que nuestros pueblos poseen conocimientos y valores humanos que son dignos de preservarse y transmitirse para las nuevas generaciones; nosotros no lo dudamos, estamos plenamente convencidos de eso. El problema está en esos valores y conocimientos que se encuentran subordinados a la sociedad nacional en donde prevalecen los valores de la sociedad dominante. El machismo, el consumismo, la prepotencia, el individualismo, la violencia y el egoísmo son los valores que muchas veces se privilegian de manera subliminal. También estamos regidos por leyes y normas, que no son escritas, y que contradicen las normas y valores tradicionales de nuestros pueblos y de nuestros ancianos.

Nos costará mucho construir un nuevo modelo de sociedad en donde los pueblos indígenas podamos convivir democráticamente con el resto de la sociedad nacional. Por principio, habrá que cuestionar la idea de la cultura nacional para dar paso al reconocimiento de culturas regionales y locales. Será necesario descentralizar las acciones culturales para posibilitar que nuestros pueblos expresen su saber, su arte y sus valores.

Respecto de la lengua, por ejemplo, los pueblos tienen que usarla en todos los ámbitos sociales: en la escuela, en las fiestas, en el mercado, en el palacio municipal, en las reuniones, en las oficinas, etcétera. Tiene que ser una lengua que se hable, se lea y se escriba; debe usarse para cantar y escribir lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos y la historia de nuestros pueblos.

Nuestras lenguas nacionales, que por cierto son por lo menos cincuenta y seis, tienen que salirse del ámbito comunitario y familiar para manifestarse con fuerza y dignidad. Tenemos que trascender de la defensa retórica y académica para realizar accio-

nes prácticas de desarrollo de todos nuestros idiomas nacionales. Nuestra lengua materna tiene la misma importancia que el español, por eso es muy importante el papel que juegan las escuelas bilingües de educación indígena en esta región fronteriza, por la dignidad y por la reivindicación de nuestra lengua y cultura.

La sociedad hispanohablante tiene que aprender los idiomas de su región. En nuestro futuro de sociedad multiétnica, como nación moderna, ya no podrá administrarse, por ejemplo, a un michoacano que no incorpore la cultura purépecha a su proyecto de vida individual y de grupo. Esto mismo es válido para las diferentes regiones étnicas del país, pues necesitamos afirmarnos y respetarnos por dentro para poder competir con seguridad y dignidad hacia fuera. Varios países europeos y orientales nos han dado ejemplos de convivencia multilingüe y pluricultural.

La significación y desarrollo de nuestras lenguas nacionales es tan sólo una parte de esa relación simétrica que buscamos entre la lengua indígena y la sociedad nacional. Esta acción tiene que trascender a otros ámbitos más amplios para permear a la cultura indígena y a la cultura nacional.

Hasta ahora, en su mayoría, han sido investigadores extranjeros los que han explorado y ponderado nuestros orígenes históricos y culturales. De aquí en adelante, deben ser los pueblos indígenas y la sociedad mestiza hispanohablante quienes se ocupen de estudiar y difundir nuestros valores y conocimientos. No podemos seguir reforzando en las nuevas generaciones la historia mítica de nuestros orígenes sólo por la presencia arqueológica de nuestros pueblos. Ellos tienen que tomar conciencia de que los pueblos indígenas existimos aquí y ahora y que nuestra presencia no sólo representa la pobreza y miseria para el país. Significa también un potencial humano y valores sociales que han enriquecido y pueden fortalecer el futuro de México.

Sólo en esta nueva relación simétrica entre indígenas y sociedad nacional puede concebirse, a mi juicio, la modernidad que los pueblos del mundo están experimentando y que nuestro país no puede, ni debe escaparse de él.

Hasta los siete años de edad, recuerdo ahora, nunca me pregunté quién era, mi pueblo lo era todo, un espacio social que me daba una identidad propia. La lengua mixteca, que es mi lengua materna, cubría todas mis necesidades de comunicación; era para mí, en aquel momento, la lengua universal. Me daba cuenta de que la lengua de mis padres estaba presente en todos los rincones de mi familia y de mi pueblo. En esa lengua se comunicaban los niños, los adultos y los ancianos. Según los contextos en que se usaba, la lengua adquiría tonalidades, niveles y profundidades. Representaba para mí, una gran emoción escucharla y poder comunicarme en ella y con ella.

Mi pueblo también ofrecía roles culturales que con el tiempo iban conformando valores que los miembros de la comunidad interiorizaban. Recuerdo, ahora, que los niños teníamos que saludar a los adultos y ancianos no con indiferencia, sino con respeto y distinción; a todos los ancianos les decíamos abuelos o abuelas,

y a los adultos, tías y tíos; eran costumbres que, con el tiempo, iban formando en nuestra conciencia un tejido social comunitario, que cotidianamente favorecía la armonía y la convivencia.

En las ceremonias tradicionales al maíz, a la calabaza y al frijol, se nos insistía que la tierra es sagrada-nuestra madre, que cada inicio de temporada el abuelo tenía que darle de beber a la tierra y cada levantada de cosecha agradecerle a la lluvia con cohetes, incienso o copal por la gran abundancia de donde proviene nuestro sustento. Sentía que la comunidad era como una gran escuela, una gran familia en donde me enseñaban y aprendía cosas útiles para la vida, y donde también recibía castigos por violentar normas tradicionales, por ejemplo, pisar granos de maíz o tender cosas sobre ellos.

La identidad rota

Parte del martirio de saber quién era, empezó cuando asistí a la escuela Ignacio Manuel Altamirano, de Santo Domingo Tonalá, un pueblo mestizo. Recuerdo que la maestra y mis compañeros del grupo hablaban en otra lengua, no hablaban mi idioma, entonces me di cuenta de que tenía que aprender otro idioma para poder subsistir en el grupo y salir adelante. ¡Caray! lejos de mi tierra empecé a reflexionar sobre mi cultura y del nivel de vida que recibí de mis padres y del pueblo; la maestra reprimía severamente a los niños que hablaban la lengua de sus padres. Entonces empezaron mis primeras dudas sobre la validez de mi lengua, de mi cultura y de todo lo que la comunidad y mis padres me habían enseñado y me seguían enseñando. A los catorce años tuve que regresar a mi pueblo para prestar mis servicios en la tienda Conasupo. A los 17 años conseguí una beca de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) para asistir a un curso de inducción en donde preparan jóvenes indígenas para ser promotores culturales bilingües. En ese nuevo ambiente, en San Pablo Guelatao, ajeno a mi mundo cultural, se habla en zapoteco. Los maestros nos daban a todos el mismo trato, nos hablaban de nuestras costumbres y tradiciones, nos responsabilizaban de ser gestores de las comunidades indígenas y que el maestro bilingüe es el promotor del desarrollo de la comunidad. Entonces, yo dije: mi idioma no puede estar escondido, hablaba conmigo mismo por las noches, pensaba y tomé una decisión: lo que tengo son las armas que me dieron mis padres, mi idioma lo guardé para mí mismo; no había espacio social para comunicarme a través de él. Sólo lo usaba cuando regresaba a mi pueblo, cada año, o los seis meses o en periodos de vacaciones, debido a la distancia en que me encontraba.

El momento crítico de poner en tela de duda mi propia identidad fue cuando ingresé como maestro bilingüe, llegué a la Dirección Regional para recibir mi orden de comisión, y me dijo el señor supervisor: “sabe qué, Chalito, a usted no lo voy a comisionar como maestro, porque en las comunidades no van a creer que

usted es maestro, se va a quedar comisionado en el Instituto Nacional Indigenista para que crezca otro poco”. Otra vez a batallar, la oficina estaba en la ciudad de Huajuapán de León; otro reto, tenía que convivir con profesionistas y otro nivel de cultura. Entonces fue cuando sentí la presión de la sociedad nacional mestiza hispanohablante, se burlaban de los indígenas, pero mi trabajo me justificó ante muchas personas por ser bilingüe. Entonces me valoré como persona y como parte del grupo al que pertenezco, y así fui tomando conciencia de que era diferente, que mi lengua y todo lo que la comunidad me había enseñado estaba en desventaja; había que aprender otros conocimientos, otros valores, que muchas veces negaban o contradecían los propios.

Entonces tomé conciencia de la existencia de palabras lacerantes que la sociedad no indígena usa para herirnos, lastimarnos y humillarnos. Indio era la palabra más fuerte, indígena más o menos suave, indito era lo más paternal y condescendiente que se nos aplicaba.

Si al principio rehuía estas palabras, con el tiempo las hice propias para usarlas, desgastarlas y desecharlas. Participé en organizaciones usando estos conceptos para luchar, reclamar y denunciar.

Ahora estoy convencido de que la sociedad mestiza hispanohablante tiene que escucharnos. Tenemos que dialogar y respetarnos para trazar juntos un futuro diferente para las nuevas generaciones. La sociedad no indígena tiene que dignificar las raíces indígenas para reafirmar su identidad. En los últimos veinte años, los indios hemos hablado muy fuerte para que nos escuchen. Nosotros mismos nos damos cuenta ahora, de que, por mucho tiempo, después de 500 años, hemos estado a la defensiva. Gran parte de nuestra energía la hemos empleado muy poco tiempo para pensar en construir nuestro futuro; ahora que estamos lejos de nuestra región lingüística, corremos el riesgo de perder todo ante la cultura dominante de los mestizos y más por la influencia de la cultura norteamericana. He oído decir a los hijos de los mixtecos nacidos en Tijuana: “mis papás son de allá, yo nací aquí en Tijuana, no hablo el mixteco”; yo lo entiendo y, partiendo de esta experiencia, ahora que soy director de la escuela primaria bilingüe *Vèè Saa kuaà*, trato de dar mucho impulso a la asignatura de lengua indígena porque ahí está el éxito de la sobrevivencia de nuestra lengua y cultura mixteca, y por eso yo digo que los jóvenes están en busca de la identidad propia y se autonombran como los sureños pues ya no hablan la lengua, pero se identifican como descendientes de los mixtecos, gente que llegó del sur del país.

Víctima de la pobreza extrema

Como es de conocimiento de todos, el indígena es el más jodido en todo, y para lidiar con este problema hay que hacer cambios muy radicales a nivel nacional en las diferentes dependencias gubernamentales y crear algunas en especial, como por ejemplo:

- Crear la Procuraduría de Asuntos Indígenas en el estado de Baja California.
- Crear y alentar proyectos y programas productivos y de empleo.
- Realizar acciones en los rubros de salud, educación, vivienda, cultura, y dotar de personalidad jurídica a los migrantes a través de la creación de un Consejo Supremo Indígena con carácter pluriétnico y pluricultural.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas se llevó a cabo: todo quedó en retórica y buenos deseos. Si bien es cierto que se trata sólo de una propuesta, toca a los directamente involucrados y a sus organizaciones proponer o enriquecer la iniciativa, de tal manera que no se trate nada más de declaraciones y de buenos deseos de las dependencias oficiales o para que no suceda lo que un indígena decía: “ahora como siempre somos víctimas de la extrema promesa”.

El movimiento estudiantil de 1968 nos enseñó a organizarnos y luchar por lo que no se tiene y a la vez es un reclamo justo y digno porque nuestra carta magna así lo explica y tenemos que exigir que se cumpla.

Hermanos, todos nosotros, los migrantes sin tierra, sin hogar, sin nada que ganar y ni nada que perder, nos hemos arriesgado a explorar nuevas tierras para venir en busca de mejores condiciones y de nivel de vida para nuestros hijos, ser indígena en este país es triste, volteemos nuestros ojos hacia los niños de la calle, las mujeres vendedoras ambulantes, etcétera. Somos producto de más de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España encabezada por los insurgentes, después de evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las Leyes de Reforma y el pueblo se reveló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada ni un techo digno ni tierra ni trabajo ni salud ni alimentación ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin dependencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. ■

casa y el 6% son obreras. Un porcentaje importante de mujeres, sobre todo de jóvenes solteras, se dedica al servicio doméstico. Más de la mitad de la Población Económicamente Activa gana entre uno y dos salarios mínimos (Barroso y Canabal, 2006: 6-7).

Factores determinantes para la emigración de Tlaxco a la colonia La Chinameca fueron la búsqueda de trabajo e ingresos (60%), así como la de servicios educativos para sus hijos (40%) (Barroso *et al.*, 2004). En Acapulco, señalan sus informantes: “hay trabajo, dinero y escuelas” (Barroso *et al.*, 2004); el promedio de escolaridad en Tlaxco es de segundo de primaria y, en la colonia La Chinameca, de 6.7 grados (Barroso y Canabal, 2006: 7); además, los niños en Acapulco tienen prácticamente garantizada la educación básica y hay quienes extienden su formación escolar a alguna carrera técnica o la licenciatura.

En La Chinameca, la lucha por la fortaleza identitaria ha cristalizado en la conformación de una escuela primaria bilingüe y en un esquema organizativo que aplica formas de organización municipal de sus comunidades de origen, como es la constitución de asambleas comunitarias donde “se reúnen a discutir su problemática y la voz colectiva tiene gran peso en las decisiones que se toman para beneficio común de las colonias” (Canabal y Barroso, 2005: 25).

La migración “pone en tensión la vida de las comunidades y de los grupos” en ámbitos cruciales

de su existencia; por ejemplo, el sistema de cargos y las obligaciones comunitarias son impugnados por aquellos que se niegan a asumir un cargo para continuar su tránsito migratorio (Canabal y Barroso, 2006: 19); o bien, la migración, especialmente la internacional, lleva a que las mujeres asuman “nuevas tareas y responsabilidades que no necesariamente se traducen en una mayor capacidad de decisión, ya que se mantienen vínculos a distancia y la figura masculina sigue presente” (Canabal y Barroso, 2006: 19). En lo religioso, mientras que en la población de origen, casi la totalidad de los habitantes son católicos, sólo el 75% de los que viven en La Chinameca continúan siéndolo, con la consecuente repercusión en la asistencia y cohesión identitaria en las fiestas patronales del pueblo (Barroso *et al.*, 2004: 7).

Montañeros en Nueva York

En Nueva York, la población mexicana experimentó un incremento notable, pasando de 40 000 connacionales en 1980 a 260 889 en 2000 (se calcula, sin embargo, que la cifra real es de 420 000, lo cual se explica por la presencia de población indocumentada no censada que, según estimaciones de la Asociación Tepeyac, constituye alrededor del 90% de los mexicanos que habitan en Nueva York). De esta población, 45% son poblanos, 12% vienen del Distrito Federal, 13% de Oaxaca y 7.5%

de Guerrero, por lo que se reconoce el amplio predominio de población mixteca oriunda de poblaciones rurales de Puebla, Guerrero y Oaxaca (IME, 2007).

Los montañeros en Nueva York son trabajadores eventuales e indocumentados que trabajan en la industria de la construcción, manufactura (fábricas de ropa) y servicios (restaurantes y tiendas de autoservicios). El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan nos proporciona un vívido relato de su forma de vida en la “Gran Manzana” (ver recuadro).

Uno de los municipios pioneros en este flujo migratorio desde La Montaña hacia Nueva York fue Xalpatláhuac, desde donde se calcula que cerca de mil personas residen en la ciudad norteamericana. En el pueblo de origen, además de las inversiones producto de las remesas como las misceláneas, las casas de mampostería y las antenas de Sky o Cablevisión, la nueva cultura migratoria es perceptible en los cambios en la alimentación (que incluye pizzas y refrescos de cola), en la ropa y en los derroteros juveniles: los niños esperan concluir la primaria para irse a Estados Unidos, mientras que los jóvenes, a su retorno, se distinguen porque “se ponen tatuajes, usan el pelo largo y visten de cholos... además de negarse a hablar el náhuatl, su idioma materno” (González, 2007). En Nueva York, la mayor parte de los originarios de Xalpatláhuac es indocumentada y trabaja en establecimientos que utilizan un número pequeño de personas, lavando platos en restaurantes o como peones de albañil, ayudantes de carpintero o en pequeños almacenes (Canabal y Félix, 2004: 49; Cruz y Ferios, 2004: 74).

Entre los espacios públicos donde los montañeros se han hecho visibles en Nueva York se encuentran los comités guadalupanos de la Asociación Tepeyac, una red de organizaciones de derechos humanos de origen jesuita que ha conjugado elementos de la religiosidad popular y de organización comunitaria (Rivera, 2004: 76). De tal manera que, como señala Barrera:

Los vasos comunicantes que siguen nutriendo la vida y la identidad de los pueblos de la montaña son las prácticas y creencias religiosas sincréticas que se refuncionalizan y adaptan al nuevo escenario internacional donde viven y se desenvuelven los jóvenes migrantes de la montaña que orgullosamente se asumen *como* indígenas y al mismo tiempo se integran a la multiculturalidad marginal de Nueva York (Barrera, 2005).

En efecto, los mixtecos y tlapanecos de la región de La Montaña, a través de su participación en la Carrera Antorcha Guadalupeña México-Nueva York, organizada por la Asociación Tepeyac, han estableci-

do una articulación simbólica entre los espacios globales que ahora transitan y sus localidades de origen (Rivera, 2004: 76), llevando la antorcha hacia Chilapa, Atlixnac y Tlapa de Comonfort en su trayectoria guadalupana por territorio mexicano.

Nahuas del Norte de Guerrero: la construcción de comunidades extendidas y multisituadas

Las comunidades “extendidas” o “multisituadas” que enlazan espacios sociales comunes entre la comunidad de origen y los nuevos enclaves migratorios empiezan a hacerse visibles entre las poblaciones indígenas de Guerrero. Sin embargo, a diferencia de los mixtecos de Oaxaca que, con una amplia trayectoria en circuitos migratorios internacionales han empezado a conformar comunidades transnacionales (Besserer, 1998; Kearney, 2000), han desarrollado un complejo sistema de redes de intercambio y circulación de gente, dinero, bienes e información que traspasan continuamente las fronteras políticas, geográficas y culturales (Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992: 12; Rouse, 1992), entre las poblaciones indígenas de Guerrero esta forma de articulación transmigratoria es incipiente. Lo reciente de su flujo migratorio internacional y su condición (casi) general de indocumentados hace poco factible la libre circulación de personas a través de la frontera y disminuye sustancialmente su flujo de retorno hacia la comunidad de origen, lo que afecta la constitución y maduración de verdaderas comunidades transnacionales.

Temalac es uno de tantos pueblos del México indígena que durante la segunda mitad del siglo xx se vuelca en la búsqueda de nuevos espacios de reproducción social. Ubicado en la zona limítrofe entre Guerrero y Puebla, también marca una frontera cultural, la de los nahuas que habitan en cuencas y afluentes que circundan la cuenca alta el río Balsas y que en tiempos de la Triple Alianza tributaban en Tlalcozotitlán y durante la Colonia en el pueblo de Chilapa.

Actualmente, Temalac es una localidad de 900 habitantes asentada en el municipio mestizo de Ateango del Río, uno de los 516 municipios identificados a nivel nacional con alta o muy alta intensidad migratoria (Conapo, 2002: 36). Su configuración actual es la de una comunidad multisituada con dos enclaves migratorios principales: Puerto Vallarta en Jalisco y Waukegan, en Illinois. De las 155 familias que actualmente residen en el pueblo, 95% tiene al menos a uno de sus miembros en el “norte” o en Puerto Vallarta y se calcula que 230 familias más han optado por avecindarse definitivamente en alguno de estos dos enclaves migratorios, en torno a los cuales,

Migración y espacios de reproducción social en La Montaña

Gabriela Barroso*

Vivir en La Montaña (reproducción social)

La población de La Montaña (de Guerrero) es eminentemente indígena y campesina. La actividad principal de esa región es la agricultura de temporal, con prácticas tradicionales que atañen tecnología incipiente. “La agricultura es el tronco a partir del cual se estructura y se diseña la estrategia de la subsistencia rural” (Matías, 2000: 127).

Vivir en La Montaña es reproducir sistemas productivos, sociales y culturales que giran en torno al campo. Este último con carácter de policultivo (frijol, calabaza, en algunos lugares ciertas hortalizas), pero cuyo principal producto es el maíz: morado, colorado, azul, blanco, canario, salteado... mismo que sirve sobre todo para salvar la necesidad de autoconsumo, utilizando el excedente para la venta o intercambio (trueque) en los mercados regionales como Tlapa, Chilapa (donde los domingos los indígenas extienden sus coloridos puestos para realizar intercambio y venta con pobladores de otras etnias y mestizos). En tales mercados se observa también la artesanía que elaboran y venden como complemento a la actividad agropecuaria y como parte de las estrategias económicas de sobrevivencia.

En la actualidad, ser montañero es ser habitante de cualquiera de estos tres pueblos indígenas: nahuas, tlapanecos, mixtecos (Matías, 2000: 31). Sin embargo, para entender los procesos que se viven en La Montaña es preciso considerarla como una región con características generales y comunes que la unifican y con características específicas que rinden cuenta de procesos dinámicos microrregionales o inclusive locales. Los montañeros son los habitantes de La Montaña de Guerrero, los que le han dado forma y los que la seguirán construyendo con sus acciones cotidianas, luchas sociales y proyectos de futuro. En ella, día con día, sus habitantes se realizan, hacen su historia, la personal y la de la región y la moldean (Canabal y Flores, 2004: 6).

Los cambios más radicales vistos en La Montaña en la última década obedecen a la creciente migración a la que han estado expuestos sus habitantes. Las formas de reproducción social en los diferentes espacios, donde ellas y ellos hacen su historia actual, han sido y son impactados por la migración.

Los que se quedan (efectos de la migración)

El proceso de la migración se ha diversificado e intensificado en la última década en La Montaña, lo que ha trastocado la vida cotidiana y las formas de reproducción social. Ante la crisis del agro en la región, la migración ha devenido en la alternativa prioritaria como estrategia de sobrevivencia, frente a un campo que se niega a morir y sobrevive gracias a los procesos dinámicos de reproducción social que sus habitantes reinventan y que se manifiestan en estrategias y acciones concretas de índole económica, social y cultural.

Las remesas internacionales están trastocando incluso espacios como la composición del paisaje: en Xalpatláhuac, “la población está compuesta mayoritariamente por indígenas, con suelos erosionados y casas vistosas” (Cruz y Ferias, 2004: 64). Otro ejemplo es la inversión de remesas en vehículos que son pequeñas camionetas de redilas, las cuales son utilizadas para salir de los pueblos y trasladar mercancía y personas hacia Tlapa —centro político y comercial de La Montaña. Se resuelve así —aunque de manera insuficiente— el problema del transporte en la región. El paisaje luce las camionetas nuevas y lustrosas repletas de mercancías y personas por los caminos de terracería, zigzagueantes y harto accidentados, sobre todo en tiempo de lluvias.

Pero también, en la esfera social, la migración ha trastocado espacios de reproducción social, los roles tradicionales de las mujeres se refuncionalizan: si bien los hombres habían jugado un papel preponderante desde una estructura patrifuncional, las mujeres se especializaban en las tareas que diferenciaban y separaban de manera tajante el quehacer femenino del masculino. Con la salida de los hombres —en un primer momento—, las mujeres los suplían en sus tareas primordiales como el trabajo en el campo, la asistencia a reuniones del pueblo, toman cada vez más decisiones propias desde su perspectiva, lo cual les abre espacios públicos antes negados al sexo femenino. La relación de la mujer frente al hombre ha cambiado, ya que ellas ocupan ahora de manera preferente la jefatura del hogar, lo cual se manifiesta a nivel de la comunidad. Surgen de esta manera ventajas y desventajas comparativas en función de la ausencia del esposo: el incipiente empoderamiento se podría tomar como un derecho ejercido por las mujeres, sin embargo, la cultura tradicional sobre la mujer pesa en las poblaciones donde el marido se ha ido y la esposa no queda libre, sino “al cargo” del hombre más próximo —ya sea el suegro, el cuñado u otro, e incluso, otra mujer— que “cuida” que ésta cumpla sus funciones tradicionales, pero además se añaden las nuevas tareas “ganadas” en los espacios públicos, lo que da paso a la “renegociación de la

* Coordinadora de Cuerpo Académico, Unidad de Ciencias del Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero.

relación de género y la reedición de la propia identidad femenina” (Maier, 2006: 201). Sin embargo, el trabajo cotidiano para ellas se multiplica, adquiriendo, también, mayores responsabilidades.

Allende La Montaña (permanencia y cambio)

Hoy por hoy, La Montaña de Guerrero es una región comprimida en términos productivos. Sus habitantes se han visto inducidos a salir de sus pueblos para satisfacer la demanda de empleo. Con la migración, las estructuras y formas de reproducción social cambian, se remodelan en un proceso dinámico en el que conviven permanencia y cambio “en términos de acciones sociales” concretas (Canabal, 2005: 104) que fomentan y dirigen a su vez el cambio. Tal proceso dialéctico de permanencia y cambio se reproduce en el lugar de origen —esto es, en todos los pueblos de La Montaña. Pero también se reproduce en los lugares de arribo, según sea el caso. Por ejemplo, en cuanto a los jornaleros agrícolas, quienes no se integran de manera fehaciente —no les interesa hacerlo— como miembros en proceso de asimilación en las sociedades que los reciben: en el noroeste de México (Sinaloa, Baja California, etcétera), o en el centro del país (como en el caso de los jornaleros que van a Morelos). En ese sentido, van a trabajar pero permanecen prácticamente “aislados” en términos de su integración social, porque ellos pertenecen a sus pueblos, a donde regresan, donde nacieron y están asimilados en un sentido de igualdad de oportunidades; finalmente regresan a casa, a sus pueblos, a sus espacios verdaderos.

Sin embargo, cuando las familias adoptan la migración como cambio de residencia, entra en juego, con mayor ímpetu, el rediseñamiento de los patrones de reproducción social. Se trata entonces del replanteamiento de formas identitarias de ser; ante nuevos espacios, nuevos escenarios. Tal es el caso de los indígenas montañeros que han emigrado a algunas ciudades del mismo estado de Guerrero —Acapulco, Zihuatanejo, Taxco— donde se han visto en la necesidad de renegociar nuevas formas de inserción laboral en las economías locales (con estrategias de desarrollo concretas como es el caso del servicio doméstico, el comercio ambulante, al autoservicio e incluso la prostitución).

También se han visto trastocadas las formas de reproducción social correspondientes a sus pueblos, ante un doble escenario: vivir “aquí” (en el lugar de arribo) pero pertenecer al mismo tiempo al “aquí y al allá”, dicotomía, esta última, que impele a los migrantes al intento de asimilarse en la sociedad de arribo, proceso que puede tardar varias generaciones, como en el caso de los indígenas en Acapulco, cuya primera generación vivió lo más difícil hace aproximadamente 25 años, sin hablar español, con indumentaria, hábitos y costumbres rurales que se diferenciaban mucho del ambiente urbano y turístico al que llegaron.

“Cuando llegamos aquí, yo no hablaba español, me costó mucho trabajo ir a la escuela y aprender en español”, dijo un joven mixteco que actualmente estudia en la Universidad Autónoma de Guerrero. “Cuando llegué a Acapulco, yo tenía nueve

años, vendíamos chicles toda la familia”, comenta una señora mixteca cuyo esposo se encuentra actualmente en Estados Unidos (Barroso-Canabal, 2006: 13).

Las formas de reproducción social sufrieron un parteaguas, en tanto los montañeros se insertaban y adaptaban en nuevos espacios, los lugares de arribo (siempre a través de redes de solidaridad compuestas por paisanos y parientes del mismo pueblo), al tiempo que preservaban intacto el lazo de unión con el pueblo origen, en cuyo espacio se recrea la identidad cultural.

La metamorfosis identitaria es más accesible para los menores de edad y para las generaciones venideras, en tanto nacer y/o crecer en un lugar entraña un proceso de adaptación y asimilación más natural. Sin embargo, no fue ni ha sido fácil integrarse en sociedades que privilegian, demandan y giran en torno al lujo, los dólares y el derroche permanente como símbolo de estatus social, elementos que no forman parte, necesariamente, de las sociedades indígenas de La Montaña.

En Acapulco —como en otras muchas ciudades— los indígenas forman el estrato social más pobre y marginado de la ciudad, y, si bien las segundas y terceras generaciones tienen cierto acceso a servicios a los que no acceden en sus pueblos, observan los índices de educación formal (escolar) más bajos, la cobertura de salud no excede al 5% de los indígenas (INEGI, 2000).

Los y las indígenas montañeros en Acapulco, con el paso del tiempo, han implementado formas de reproducción social que van más allá de lo económico. Se han organizado retomando algunas costumbres propias de los pueblos de La Montaña, como la creación de la Comisaría Municipal Indígena en Acapulco. También han logrado construir, con muchos esfuerzos, las pocas escuelas indígenas bilingües existentes, cuya educación se imparte en español/mixteco, español/náhuatl, español/tlapaneco, fomentando el rescate y preservación de la lengua de origen como un legado para las siguientes generaciones, reforzando así la historia común, la identidad colectiva, una identidad que navega a contracorriente en el maremágnum consumista y racista globalizador (Barrera, 2005: 195) de las ciudades de arribo de los montañeros dentro del mismo estado de Guerrero, o de las ciudades norteamericanas (Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Carolina del Norte, etcétera) donde hoy se debaten los indígenas mexicanos en lucha por la sobrevivencia.

De tal manera que las formas de reproducción sociocultural giran en torno, también, a una identidad colectiva que afianza sus raíces históricas a pesar de —y debido a— vivir fuera de los pueblos de La Montaña; identidad que se niega a fenecer, al tiempo que se recrea, con ingenio y mucho esfuerzo, a través de prácticas de reproducción social que cohesionan tal colectividad. Estas formas de reproducción social se recrean en la cotidianidad, en un proceso dialéctico reflejado en la permanencia y el cambio, en el “aquí” (nuevos espacios, nuevas formas de reproducción) y en el “allá” (el pueblo donde fueron enterrados sus ombligos al nacer y donde moran sus ancestros). ■

la mayor parte de los grupos domésticos de Temalac proyecta y entreteje su vida.

La presión demográfica sobre las tierras de cultivo y sobre los recursos sujetos a colecta, el cambio climático tal como es percibido localmente, la deforestación de la zona, la perforación de pozos y la retención y contaminación aguas arriba, de los afluentes del río Balsas, fueron factores que contribuyeron a la crisis ecológica en la región. En la encrucijada por la sobrevivencia, a partir de la década de los años sesenta, cada pueblo del norte de Guerrero ensayó nuevas estrategias de reproducción social. En el caso de Temalac, las estrategias abarcaron desde la venta de piezas arqueológicas y el peonaje para la cosecha de cultivos ilícitos en pueblos adyacentes, hasta su propia incursión en la producción de marihuana y el ensayo de una movilidad geográfica a escalas cada vez más amplias, hecho que terminó por inclinar la balanza de su reproducción social alrededor de esta última opción: migrar.

Sus redes de movilidad transitaron en el transcurso de tres décadas, desde los espacios regionales donde vendían sus excedentes de maíz, su producción de mezcal y otros productos como la palma, el otate y las plantas medicinales en la década de los sesenta, a la migración cíclica en la siguiente década como jornaleros agrícolas. Primero en las zonas hortícolas y cañeras de Morelos y cañaverales de Veracruz, posteriormente, siguiendo la ruta del Pacífico, el destino principal fue la extensa zona de agricultura de riego en el municipio de Guadalupe Victoria en Nayarit. En la década de los ochenta, Temalac consolida una migración de asentamiento en Puerto Vallarta, Jalisco, constituyendo su principal enclave nacional y en la década de los noventa, una nueva ruta migratoria internacional termina por arraigarles en Waukegan, Illinois. Centramos la descripción en este último destino migratorio.

La migración internacional: Waukegan, Illinois

Para los campesinos de Temalac, la migración transnacional inicia a finales de la década de los ochenta aprovechando el parentesco y la red social con los campesinos de Cohetzala, pueblo nahua del sur de Puebla colindante con Temalac, cuya migración a Waukegan, Illinois empieza a verse forzada por efecto de sus vínculos con el narcotráfico. Hostigados por el ejército, los habitantes de Cohetzala impulsaron intempestivamente su carrera migratoria hacia Waukegan, donde residían algunos paisanos que habían sido beneficiados por el Programa Bracero décadas atrás.

Waukegan es una ciudad a orillas del lago Michigan, en la zona metropolitana de Chicago. Habitada originalmente por migrantes de origen italiano,

griego y eslovaco, el *boom* industrial de finales de los sesenta atrajo a población afroamericana proveniente del sur de la Unión Americana. Una nueva reestructuración industrial en los años ochenta demandó nuevos contingentes de mano de obra, los cuales esta vez fueron cubiertos por población hispana. Actualmente, el 75% de los obreros del sector manufacturero en los poblados industriales del área metropolitana de Chicago son mexicanos (Fox, 2005: 38), y en este contexto los indígenas nahuas de Temalac nutren ahora el contingente obrero-fabril de esta región.

Waukegan es una ciudad de 90 000 habitantes —la cuarta en densidad de población del área metropolitana de Chicago— donde el 45% de la población es latina —la mayoría de origen mexicano— y 20% es población afroamericana. Con los años, los anglos se han ido desplazando a nuevas urbanizaciones, dejando el distrito como un barrio fundamentalmente hispano. Como enclave latino, en la calle, los comercios y en las fábricas de Waukegan donde se concentra el trabajo no calificado, la lengua franca es el castellano. Los dependientes de los bancos, oficinas de envío, almacenes de ropa, comida y demás servicios son mexicanos o salvadoreños. Los supermercados tienen entre sus productos carnitas, cecina, tortillas, epazote, nopales, toda clase de chiles y guajes... ¿guajes? Sí, guajes, vainas silvestres muy apreciadas en todo el estado de Guerrero.

Una vez llegados a su destino, los migrantes de Temalac, aprovechando su red social, tardan un promedio de dos semanas a un mes en incorporarse al trabajo en las fábricas ensambladoras —de pequeñas piezas automotrices— o empacadoras —de productos alimenticios, farmacéuticos, de belleza, infantiles y de material audiovisual— en Waukegan y ciudades aledañas de North Chicago, Lake Zurich, Wauconda, Mundelein, Libertyville, Zion, Gurnee y Kenosha en el condado de Wisconsin. También trabajan en las cocinas y trastiendas de los Mc Donald's y otros restaurantes, en la industria de la construcción, en las "yardas" o jardines de los clubes de golf y en el mantenimiento de casas y jardines residenciales.

Siendo indocumentado originalmente el total de la migración de Temalac a Estados Unidos, los trabajadores indígenas compran documentos falsos y tramitan, mediante "oficinas laborales" —empresas de subcontratación— su ingreso en los mercados de trabajo. Las fábricas y otras empresas contratan en mediación a estas oficinas empleadoras, quienes a su vez pagan el salario mínimo al trabajador y se quedan con un porcentaje de la ganancia por cada hora de trabajo del migrante, de quien saben a todas luces que porta papeles falsos. Empero, por convenir a la

empresa, a la oficina contratista y en cierto modo a los mismos trabajadores indocumentados, se tejen redes de complicidad que ocultan lo evidente: para competir en el mercado global hay que minimizar los costos de producción; la contratación de indocumentados es la vía para asegurar el abaratamiento de la fuerza de trabajo en un régimen laboral flexible.

Los migrantes de Temalac ganan, a través de las oficinas de subcontratación en Waukegan, seis y medio dólares la hora (se desconoce el porcentaje de su sueldo que es retenido por la oficina de subcontratación); es decir, en Waukegan perciben el salario mínimo en Estados Unidos. Pero, por otra parte, no hay que olvidar que, en México, hombres y mujeres analfabetas o con tan baja escolaridad nunca encontrarían trabajo en una fábrica sin su certificado de primaria, mientras que en Waukegan —donde no hablar inglés y ser analfabeta es casi lo mismo en términos operativos— encuentran trabajo con celeridad.

Una característica del trabajo laboral en las yardas y como obreros en los parques industriales de los alrededores de Waukegan es que eventualmente se les “descansa” durante los meses del periodo invernal. La contratación de indocumentados como jardineros y en las yardas de los clubes de golf, implica su expulsión durante el invierno, ya que, por las condiciones climáticas, los campos de juego se mantienen cerrados o inhabilitados. Este contingente de trabajadores desempleados busca entonces trabajo durante este periodo en las empresas que subcontratan personal con la esperanza de engrosar las filas de los obreros fabriles. Este excedente de fuerza de trabajo en el invierno permite que las empresas subcontratistas “circulen” la mano de obra en el sector fabril, es decir, evitan la permanencia de los empleados en un lugar, e impiden que éstos afiancen lazos, creen vínculos o supongan derechos de antigüedad.

Cada vez más, la apuesta migratoria se hace en pareja, o bien, los más jóvenes inician uniones conyugales con sus paisanas allá. El plan familiar es que tanto el hombre como la mujer trabajen, dividiéndose ambos dos o más turnos fabriles. Por ejemplo, las mujeres cubren el horario nocturno y los hombres el diurno; además, es común que se cubran horas extras. Este arreglo familiar hace que, en promedio, se gane familiarmente unos 13 dólares la hora más las horas extras trabajadas. Ganando ambos el mínimo en Estados Unidos, una pareja cubre su deuda de origen en un año —es decir, paga al familiar y/o parentela que le facilitó un préstamo para “la pasada” del coyote— y alcanza para pagar los “biles” —recibos de la renta y manutención de la casa. A menudo, sólo después del primer año, los trabajadores empiezan a

ahorrar para enviar un poco de dinero a sus parientes en Temalac, para construir su casa o para comprarse un automóvil automático usado en Estados Unidos.

Algunos trabajadores provenientes de Temalac están empezando a comprar sus casas a crédito en Estados Unidos, señal de que su estancia allá será definitiva, aunque casi nunca lo expresan en esos términos. De cualquier manera, los trasvases económicos y la visión de futuro es interesante, pues los temalacenses de Waukegan empiezan a fincar sus casas en Puerto Vallarta-Bahía de Banderas y no en Temalac. Calculan que, si algún día ellos, por razones de salud, por incapacidad laboral o por su condición migratoria indocumentada tienen que regresar a México, sus hijos difícilmente se adaptarían a la vida del pueblo, pero en Puerto Vallarta, siendo bilingües, podrán trabajar en el sector turístico como recepcionistas de hoteles, en restaurantes, agencias de viaje, etcétera (González, 2003: 5).

Las transformaciones en una comunidad indígena multisituada

Aun cuando la cultura indígena en las comunidades extendidas o multisituadas se transforma a ritmos vertiginosos, no ocurre lo mismo con los sistemas de valores que les articulan y les dan continuidad, de manera que hay elementos de su sistema normativo que no se prestan por igual a ser negociados; entre esos elementos, como señala Bonfil (1991: 82), se encuentran los principios de reciprocidad, autosuficiencia y redistribución. A pesar de que tales principios no son privativos de la cultura indígena, una señal del “desanclaje cultural” sería entonces no atender a las reglas de reciprocidad comunitarias o liquidar por completo la pretensión de autosuficiencia. Estas reglas, no escritas pero tangibles, se expresan a través de un dispositivo cultural: la comunalidad:

Se puede llegar a ser monolingüe en español, no usar la vestimenta tradicional, dejar las prácticas rituales, pero no se puede dejar de servir a la comunidad. Más aún, quienes han migrado y viven en otros lugares obviamente no pueden trabajar cotidianamente en la comunidad, pero sí expresan su voluntad de ser parte de ella a través de enviar dinero para las fiestas, buscar personas que cubran sus servicios o regresar cuando son electos en cargos; así, la comunidad los sigue identificando como parte de ella (Maldonado, 2003: 23).

Este dispositivo, expresión palpable del sentido de pertenencia a una comunidad indígena, nos pro-

porciona claves muy significativas de lo que en sentido inverso implicaría el desanclaje de la tradición: negarse al trabajo comunal, a la ayuda mutua interfamiliar, rechazar un cargo al que se ha sido nombrado —o no buscar personas que cubran su servicio— o dejar de asistir a las fiestas —o no enviar dinero para la fiesta si se ha migrado. Estos actos podrían constituirse en “nuevas señales simbólicas” del desanclaje de la tradición. Retomaremos diversos ámbitos de la vida comunal de Temalac que nos permitan identificar algunas de estas nuevas señales:

Representante Adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. Se ha señalado que uno de los valores de la cultura indígena es el principio de autosuficiencia (Bonfil, 1991: 82). No obstante, en las últimas décadas, una intensa transformación del patrón general de subsistencia indígena ha contribuido a la pérdida gradual de la autosuficiencia alimentaria y al desmantelamiento de la economía campesina sustentada en el grupo doméstico como forma de organización social integral de la comunidad indígena/campesino/rural.

La presión demográfica sobre las tierras de cultivo, el cambio climático que afecta la periodicidad e intensidad de las lluvias, la escasez de fuerza de trabajo masculina y la implementación de políticas públicas excluyentes auspiciadas por el Tratado de Libre Comercio, dejaron a los pequeños productores temporaleros de Temalac sin apoyo, siendo los programas paliativos de alivio a la pobreza (Progresar/Oportunidades) junto con los ingresos provenientes de las remesas, los que suplen la ya de por sí exigua autosuficiencia, disimulan la precariedad y monetarizan la economía campesina encauzándola hacia nuevos patrones de consumo y también de producción.

Jóvenes: ¿sobrevivir en el pueblo o progresar?

Los jóvenes de las nuevas generaciones no están relevando a los adultos en las actividades del campo, optando por otras ocupaciones laborales o por la migración. El hecho de que el reemplazo generacional sea escaso en números totales tiene implicaciones en términos de la reproducción material, porque el éxodo ha dejado sin fuerza de trabajo masculina a los grupos domésticos de casi la totalidad de los hogares de Temalac.

Eso no impide que los que se quedan —por lo general los más viejos y los niños— siembren: “siquiera para los elotes” —dicen. Los patriarcas aseguran además que no dejarán de sembrar maíz hasta que se mueran, aun cuando salga más cara su producción

que comprar el maíz de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). A pesar, incluso, de que la demanda energética corporal y el desgaste físico excedan con mucho el beneficio, si éste sólo se contabilizara en términos económicos.

En tanto, para los jóvenes de Temalac que, a diferencia de sus padres, tienen tres a nueve años de escolaridad, los valores y sistemas normativos de la cultura indígena han perdido la seguridad ontológica que brindaba a las generaciones previas. Para ellos, el arraigo en el pueblo ha perdido relevancia, y si se piensan en Temalac, su sueño es poner ahí un negocio para “sobrevivir” antes que “sufrir” para desarrollar las actividades productivas locales que, arguyen, demandan gran esfuerzo físico, generan incertidumbre y dan una ganancia mínima. Además, al ir a la escuela, muchos de ellos han perdido parte de las competencias y habilidades de sus padres: campesinos recios, esforzados, acostumbrados a las carencias y trabajos duros.

De manera que, para los jóvenes, la migración es su única opción para “progresar”. Sin embargo, a diferencia de la primera generación que salió del pueblo, no piensan en ir a cosechar jitomates al norte: su intención al migrar es trabajar en actividades secundarias o terciarias. También, la televisión les anuncia que hay otras formas de vida y ellos en ese “pueblo polvoso” simplemente se aburren. Por otro lado, el valor de la reciprocidad hacia sus padres ha perdido peso; muchos de ellos ya no sienten que “se deban” a sus progenitores, sino a sí mismos.

Al salir de la secundaria, los jóvenes y las parejas que aún viven en el pueblo se plantean hoy dos opciones migratorias: ¿A Puerto Vallarta o a Waukegan? —o a los destinos secundarios que son sus réplicas: Los Cabos y Carolina del Norte. También, los jóvenes o las parejas que aparentemente ya se han asentado en Puerto Vallarta, pero no acaban de lograr ahí una permanencia exitosa, optan de manera temporal o definitiva hacia la migración transnacional. Ya han internalizado un nuevo referente cultural en el cual se están especializando: seguir los flujos de capital.

Renuncia a la membresía comunitaria

En los enclaves nacionales e internacionales de esta comunidad multisituada, se mantiene vigente y se actualiza año con año la cooperación para la fiesta del pueblo. Largas listas con el nombre y la cuota aportados por cada uno de los paisanos es enviada puntualmente a Temalac. Sin embargo, en los enclaves internacionales es significativo que un porcentaje —aunque mínimo— de jóvenes migrantes procedentes de

Temalac estén generando estrategias explícitas para desanclarse del engranaje comunal: deciden fijar su residencia fuera del suburbio donde vive la mayor parte de “la paisanada” para evadir su control social; no proporcionan sus referencias —dirección y número de teléfono— y evitan ser localizados para asistir a las asambleas extraterritoriales y así sustraerse de la cooperación para la fiesta del pueblo. Muchos de estos jóvenes han renunciado a su pertenencia comunitaria porque han resuelto ya no retornar a Temalac. En su balance, la libertad y autonomía de que gozan en el enclave transnacional sería imposible en la comunidad de origen, donde el régimen gerontocrático y patriarcal constriñe su independencia de criterio, su libertad de opciones y su autonomía.

Trastocamiento de las solidaridades
y valores fincados en la reciprocidad

Uno de los valores que operan profundamente entre los indígenas nahuas del norte de Guerrero es que la crianza “se paga” o, dicho de modo más formal, reditúa en actos de reciprocidad hacia los padres en su vejez. El imaginario de cualquier padre o madre con respecto a su futuro era que viviría, como hasta entonces, bajo el régimen de una familia extensa en donde todos comparten tanto las ganancias como las pérdidas.

Las mujeres nahuas mayores de 45 años tienen en promedio 6.6 hijos nacidos vivos; sin embargo, el éxodo migratorio ha llevado a que la mayor parte “tengan” a la totalidad de sus hijos mayores de quince años fuera del pueblo. Con la migración de sus hijos, las madres habían cifrado su esperanza de una vida mejor, no sólo para su prole migrante, sino también para ellas y la familia que se quedó en el pueblo. Se concebía que era ineludible que ellos, sus hijos, desde donde estuviesen, los harían partícipes de su bienestar y relativa bonanza.

En efecto, la migración produjo ingresos provenientes de las remesas, que mejoraron el consumo familiar, permitieron resolver problemas de salud ingentes y se tradujeron en modificaciones sustantivas en las viviendas de Temalac. Por varios años, los hijos y los esposos no olvidaron sus compromisos familiares, enviando puntualmente recursos para sus familias y para la construcción de su vivienda. No obstante, después de un lapso variable, los hijos dejaron de mandar dinero o empezaron a espaciar las remesas. La razón fundamental es que en un periodo de cinco a siete años de migración a Waukegan, Illinois, los indígenas nahuas, acostumbrados a vivir con lo menos en su pueblo, empiezan a diversificar su dieta, a comprar-

se más que un par de zapatos, al tiempo que los niños quieren juguetes y “su tele en el cuarto”, en fin, se han ido incorporando progresivamente a la sociedad de consumo norteamericana; por tanto, ahorran menos y gastan más. Ello tiene implicaciones en el pueblo porque han reducido sus remesas olvidando los compromisos familiares con los que se quedaron allá. Tal vez por vergüenza o para evitar el reclamo por sus olvidos ya no hablan a sus familiares en Temalac.

Una pareja de viejos desconsolados decía: ¡Parece que los echamos a la cárcel! o ¿por qué ni siquiera nos llaman? o como dijo María cuando supo que el noveno de sus hijos, el único que quedaba en el pueblo se iba: ¿Pus qué soy huilota?, ¡nomás le salen plumas a sus crías y ya las está echando del nido! Cuando le pregunté a María qué era lo que le provocaba más sentimiento, me respondió con lágrimas en los ojos: ¡Saber que nunca jamás podré ver a todos mis hijos juntos!

La migración ha impactado en el terreno de las emociones, ha dejado profundas heridas del alma, especialmente en las mujeres que esperan de sus hijos y esposos migrantes cuando menos un gesto de afecto. Este gesto se traduce para las mujeres de Temalac en llamadas telefónicas a la única caseta del pueblo y en el envío de remesas, que aunque sea de unos cuantos dólares, permitan a sus familiares en el pueblo una magra sobrevivencia.

Los padres, ahora abandonados, se resisten a desempeñar las actividades que antes hacían en el pueblo sin más. Doña Lucía, por ejemplo, se niega ya a vender leña en el pueblo, ¿Qué va a decir la gente? —se interroga—, ¿que no tienes varios hijos en el Norte? Por otra parte, la sujeción y desamparo de las mujeres jóvenes cuyos esposos están en el Norte puede ser aún peor, porque viviendo en el hogar de sus suegros en el contexto de una familia extensa patrivirilocal, puede ocurrir que sus suegros sean los receptores de los migrodólares enviados o, al menos, quienes deciden la distribución de estos recursos incluyendo, obviamente, las necesidades de la familia extensa.

Visto desde esta perspectiva, la movilidad hacia los espacios transnacionales ha tenido efectos desintegradores y de ruptura familiar entre la generación de los padres que aun residen en el pueblo y la de sus hijos que se han trasladado a la comunidad transnacional. En ese sentido, resulta paradójico, por ejemplo, que los hijos sigan mandando puntualmente su cuota para la fiesta patronal del pueblo y, al mismo tiempo, dejen de enviar remesas a sus padres o demás familiares, hecho que por sí solo refleja un cambio de orientación en las esferas de valor existentes en el mundo de vida de los temalaquenses migrantes, pues

si la reciprocidad filial se inserta en el contexto de los valores de uso marcados por la tradición, el envío de su cuota para la fiesta patronal es una “acción racional con arreglo a fines” que garantiza su membresía comunitaria en Temalac, es decir, de acuerdo con Weber, justamente la diferenciación de estas esferas de valor sería uno de los marcadores del tránsito de la tradición a la modernidad (Habermas, 1992: 434).

La migración: un hecho social total

A la par de estos cambios en las esferas de valor, la migración, como hecho social total, está poniendo en juego la reconfiguración entera de la vida social en Temalac. La migración no sólo ha contribuido a la regeneración relativa de los ecosistemas por efecto de la descarga en la presión demográfica sobre las tierras de labor o sobre el bosque nativo; no sólo ha transformado la arquitectura de los pueblos con nuevas casas de ladrillo o hecho más vistosas las fiestas del pueblo por efecto de los migrodólares que puntualmente llegan en la víspera de las celebraciones patronales para cumplir con el ciclo festivo-ritual; la migración indígena también ha modificado sustancialmente la estructura de la población, de la producción y de la reproducción social.

A manera de ejemplo, si la migración transnacional tiene visos de ser permanente, es decir, se ha constituido en una migración de asentamiento que abarca a familias nucleares completas, la comunidad de origen deja de ser el sitio de reproducción social de la comunidad extendida. Este fenómeno se hace evidente porque la tasa de crecimiento demográfico de Temalac es negativa.

El escaso reemplazo generacional no sólo afecta la fuerza de trabajo y la estructura productiva; su

déficit, concatenado a la escasez de jóvenes que continúan sus estudios, vulnera el rumbo y la trayectoria futura de la comunidad, ante la pérdida de una masa crítica que contribuya a articular respuestas desde lo local ante el embate de la globalización.

En este trabajo hemos desarrollado la tesis de que, durante la segunda mitad del siglo xx, la inserción económica de los indígenas guerrerenses en los procesos de globalización estuvo supeditada a su adaptación a la cambiante circulación del capital y a su disponibilidad para la movilidad geográfica, incursionando en redes de movilidad no excluyentes entre sí: la que conforman como jornaleros agrícolas migrantes, la que les vincula a los centros turísticos nacionales y la que les articula a la migración internacional indocumentada.

En los albores del siglo xxi, son perceptibles tanto los procesos de asentamiento y/o consolidación en nuevos espacios de reproducción social, para algunos como el mantenimiento constante de esta movilidad, para muchos, convirtiéndose en un estado y forma de vida, con sus consecuentes cuotas de explotación diferencial y precarización laboral.

Si bien la mayor parte de los estudios actuales tiende a subrayar los factores de cohesión social presentes en los nuevos nichos migratorios y con sus comunidades de origen, es discutible que en los nuevos enclaves internacionales puedan consolidarse hoy verdaderas comunidades transnacionales, como ocurre entre los indígenas de Oaxaca, tanto por lo reciente de su flujo migratorio como por la limitante de que la mayor parte de la población indígena de Guerrero es indocumentada y, por ende, con serias dificultades para la libre circulación de las personas, condición necesaria para consolidar verdaderas comunidades transnacionales.